



Luchemos por una

República Socialista Federal

► En este número

INTERNACIONAL

- Elecciones en Chile
- Huelga general en Corea del Sur
- ¿Revolución proeuropea en Ucrania?
- Profesores se movilizan en Marruecos

ESTADO ESPAÑOL

- La cuestión nacional en Catalunya
- Histórica manifestación en Euskal Herria
- El gran negocio del sector eléctrico
- El caso Blesa y la corrupción en Caja Madrid
- Contra la ley reaccionaria del aborto
- La lucha contra la LOMCE continúa

SINDICAL

- Contra los traslados en SDS
- ¡Ivonne readmitida! La lucha sirve

TEORÍA

- El programa de transición

Elecciones presidenciales en Chile

Victoria de Bachelet con una abstención histórica

Miguel Ángel Domingo

El pasado 15 de diciembre se celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas. Michelle Bachelet ganó por un amplio margen (62% de los votos frente al 38%) a la candidata de la derecha pinochetista, Evelyn Matthei. La prensa burguesa ha difundido ampliamente la victoria y la agenda “reformista” de Bachelet y la coalición Nueva Mayoría, como prueba de los grandes cambios a mejor que se avecinan para la población chilena. La realidad es un poco distinta.

La derecha, derrotada en la calle y en las urnas

Lo primero que hay que dejar claro es que estos resultados echan por tierra los análisis interesados de hace cuatro años, que se empeñaban en explicar la victoria del empresario derechista Piñera por un giro a la derecha en la sociedad chilena. Entonces ya señalamos lo falso de ese análisis de los medios de comunicación y de parte de la izquierda. La lucha de clases se ha encargado en este período de contestar el recurrente argumento del “giro a la derecha”.

En mayo de 2011 dio comienzo una auténtica explosión social, que empezó con una lucha educativa y se extendió hasta fundirse con el movimiento obrero en dos paros nacionales de 48 horas en agosto y octubre de ese año. Frente a eso, analistas, asesores y tertulianos de la derecha se han limitado a poner encima de la mesa los datos económicos tan “positivos” que arroja el país: un crecimiento medio anual del 5,5%, una inflación controlada o un desempleo del 5,7%.

Lo que hay detrás, tanto de la derrota de la derecha como de esas cifras, es la mentira del llamado “milagro chileno”, el modelo económico de liberalismo a ultranza (es decir, privatizaciones masivas: sanidad, educación, pensiones, empresas públicas...) que implantó la dictadura pinochetista y que veinte años de gobiernos socialdemócratas de la Concertación (coalición de Partido Socialista y Democracia Cristiana) han sido incapaces de dismantelar.

Ese supuesto milagro esconde, por ejemplo, que según la OCDE Chile tiene el mayor índice en desigualdad de ingresos y de



Michelle Bachelet, entre las diputadas del PC Camila Vallejo y Karol Cariola

oportunidades entre los países miembros; ocupa el tercer lugar en el ranking de pobreza, con un 18,9%, o que el 38% de la población dice que con sus ingresos no alcanza para sus necesidades básicas. El propio presidente Piñera tuvo que reconocer en septiembre de 2011, en medio de las movilizaciones masivas, la profunda desigualdad que caracteriza a Chile: “admito que la brecha de desigualdad en el país es escandalosa”. De hecho, antes de las elecciones, el gobierno había fijado el año 2018 como el objetivo para alcanzar el estatus de país desarrollado.

Por otro lado, esta situación también ha tenido como consecuencia un proceso de “desafección” de la política oficial superior incluso al de muchos países europeos. Es cierto que las elecciones municipales de 2012 introdujeron el voto voluntario (hasta entonces obligatorio), pero así es en Europa y otros países latinoamericanos y no se dan estas cifras demoledoras de abstención: casi un 60% en las municipales de 2012, un 50% en la primera vuelta y un 58% en esta segunda vuelta. Tan demoledor que se produce algo paradójico: en esta segunda vuelta Bachelet ha obtenido menos votos (3.470.055) que los que obtuvo Piñera en 2010 (3.591.182); la clave de la victoria ha estado en la pérdida de un millón y medio de votos por la derecha pinochetista.

De la Concertación a la Nueva Mayoría

Tras la victoria de Piñera en 2010, el modelo de la Concertación daba muestras más que sobradas de agotamiento. Para estas elecciones, se ha practicado un “lavado de cara” en la propia coalición y en el programa

con que se presenta. Por un lado, han abierto la puerta después de dos décadas al Partido Comunista, cambiando el nombre de la coalición a Nueva Mayoría. Desde la prensa burguesa no se andaban con rodeos a la hora de presentar este caramelo envenenado: “El PC también será un engranaje clave para intentar controlar las protestas callejeras en una eventual nueva Administración de la socialista y evitar, de esa forma, que se repitan los problemas sociales que ha debido enfrentar Piñera” (*elpais.com*, 26/5/2013).

En cuanto al ambicioso programa de reformas, gira en torno a tres aspectos: la educación, con el objetivo de que sea gratuita en seis años y la vista puesta en desactivar las posibles movilizaciones estudiantiles; la reforma fiscal, es decir, subir los impuestos a los ricos para pagar esa educación gratuita y otras reformas; y una nueva constitución. El camino para conseguirlo: “pretende llevar adelante su paquete de reformas profundas, pero gradualmente, cuidando la gobernabilidad y sin renunciar a acuerdos políticos con la derecha en el Congreso, que fue uno de los sellos de los Gobiernos de la Concertación (1990-2010). Quiere evitar escenarios de polarización y no está en un registro ni revolucionario ni chavista, afirman sus colaboradores cercanos. (...) Recalcan que su programa de Gobierno no contempla bajo ninguna circunstancia socavar las bases del modelo chileno, una economía de mercado heredada del régimen de Pinochet” (*elpais.com*, 18/11/13).

Las limitadas expectativas de estas promesas se confirman por el hecho de que Bachelet se convierte en la presidenta latinoamericana con el menor porcentaje de votos sobre el electorado: un 25%. La re-

forma educativa lleva prometiéndose los veinte años de gobiernos de la Concertación, e incumpléndose esa promesa los mismos años. Las masas en Chile ya han pasado por la experiencia de Bachelet en el gobierno, un gobierno que generó muchas ilusiones en su elección en 2006 pero fueron rápidamente defraudadas, dando lugar a la victoria de Piñera.

Una oportunidad para el PC

En este contexto, el PC podría jugar un papel importante. Ha duplicado su grupo parlamentario —se celebraron elecciones legislativas coincidiendo con la primera vuelta de las presidenciales—, pasando de 3 a 6 diputados. Dos de los tres nuevos asientos han sido ganados por la secretaria general de las Juventudes Comunistas (Karol Cariola) y por la dirigente estudiantil Camila Vallejo. Ambas fueron las más votadas en sus zonas (38,5% y 43,7% respectivamente). Estos datos apuntan en la línea de que las candidaturas vinculadas a la lucha sí conectan, arrastran más participación y son capaces de ganar elecciones. El PC incluso afirmó, junto con la CUT (el principal sindicato), que no renuncia a la movilización si las promesas de cambios profundos se incumplen. Sin embargo, hasta ahora todos sus movimientos van en la línea de cerrar filas con la agenda de Bachelet, dar credibilidad a la coalición con la Democracia Cristiana —“Nueva Mayoría tiene ‘banderas de lucha’ más claras que la Concertación”— y mostrar su disposición a entrar en el gobierno, fiando cualquier reforma al juego parlamentario, cuando ni siquiera tienen la mayoría cualificada necesaria para la reforma constitucional, con lo que tendría que haber acuerdo con la derecha pinochetista.

La izquierda ha llegado al gobierno al calor de una movilización social sin precedentes desde la caída de la dictadura. Existe la fuerza para gobernar en beneficio de la juventud y la clase obrera y dismantelar la herencia de Pinochet, pero Bachelet ha dejado claro hasta dónde piensa llegar y qué líneas no tiene intención de cruzar. Si el PC entra en el gobierno hará un flaco favor al movimiento, limitándose a aparecer como la pata izquierda del gobierno. Ningún derecho se ha conseguido en ningún parlamento sin antes haberlo ganado en la calle.

Huelga general contra la represión sindical en Corea del Sur

Lucas Picó

Corea del Sur, uno de los países más industrializados del mundo, cuenta con una poderosa y combativa clase obrera. Una clase que ha sufrido crueles dictaduras primero y gobiernos autoritarios después. La democracia burguesa no se estableció en el país hasta fechas tan tardías como 1987. Y esta supuesta democracia castiga con cárcel a los sindicalistas que organizan huelgas.

El Gobierno surcoreano (derecha) anunció su intención de crear una filial para operar el tren de alta velocidad. Los trabajadores del sector ferroviario lo denunciaron como una maniobra para privatizar el ferrocarril, despedir trabajadores y encarecer el billete, por lo que decidieron ir a la huelga.

El 22 de noviembre el 80% de los 10.000 afiliados al sindicato de la empresa Korail

(ferrocarriles estatales) votaron ir a la huelga indefinida, que dio comienzo el 9 de diciembre. Ese mismo día la empresa anunció el despido de 4.213 trabajadores y presentó denuncia contra 194 sindicalistas.

El 16 de diciembre, tras una semana de huelga, la presidenta Park atacó públicamente a los huelguistas. Simultáneamente un tribunal ordena la detención de diez sindicalistas. El día 17 la policía asalta la sede del sindicato ferroviario. Al día siguiente, el primer ministro califica la huelga de ilegal y exige su cese. El tribunal ordena la detención de otros 11 sindicalistas. El 22 de diciembre la policía asalta la sede del sindicato más combativo del país, la Confederación de Sindicatos de Corea (KCTU) buscando a los sindicalistas ferroviarios huidos. En el asalto se producen 130 detenciones. La KCTU convoca huelga general contra esta acción y en solidaridad con los trabajadores ferroviarios. El 28 de diciem-

bre tiene lugar la huelga general: una marea humana marcha de forma militante sobre Seúl.

El Gobierno mantuvo su pulso y anunció la contratación de esquirolas así como medidas punitivas contra todos los huelguistas. Simultáneamente, se mostró dispuesto a crear una comisión parlamentaria para “evitar” la privatización del ferrocarril si la huelga era desconvocada. El día 30, la huelga finaliza. Tras 22 días se ha convertido en la huelga ferroviaria más larga de la historia de Corea y marcará un hito.

No obstante, la represión continúa. El 6 de enero los fiscales pidieron orden de arresto para otros ocho sindicalistas, hay dos sindicalistas en prisión y el máximo dirigente del sindicato ferroviario, Kim Myung-hwan se encuentra huido. También un grupo de sindicalistas que se presentó voluntariamente en la comisaría fue detenido. “El jefe de policía Lee Sung-han declaró ante los

periodistas que las autoridades podrían haber tratado a los líderes sindicales que se presentaron voluntariamente con condescendencia, pero no lo hicieron porque lideraron una huelga en la que se cometieron infracciones graves y que tuvo un gran impacto sobre la economía y el Estado” (*Yonhap*, 7/1/14). Este es el lenguaje de las fuerzas represivas de un Estado que no se molesta en disimular su reciente pasado dictatorial.

La KCTU, tras la huelga general del 28 de diciembre, ha asegurado que va a continuar la lucha. El 3 de enero exigió la dimisión de Park y ha anunciado dos días más de huelga general. El proletariado surcoreano vuelve con fuerza a escena y está llamado a jugar un papel clave en los acontecimientos revolucionarios que se desarrollarán en el sudeste asiático.

Puedes leer el artículo completo en www.elmilitante.net

El imperialismo occidental disputa a Rusia su área de influencia ¿Revolución proeuropea en Ucrania?

María Castro

Las protestas que han sacudido Ucrania desde finales de noviembre han acaparado los medios de comunicación, presentando estas manifestaciones como una expresión del genuino deseo del pueblo ucraniano de unirse a la Unión Europea (UE) y alejarse de la influencia rusa. Sin embargo, si atravesamos la niebla propagandística de los medios de comunicación del capitalismo veremos que los acontecimientos en Ucrania no se corresponden exactamente con esta versión interesada y reflejan tensiones sociales más profundas.

Las manifestaciones comenzaron en la capital, Kiev, después de que el gobierno se negara a firmar el acuerdo de asociación y libre comercio con la UE, que llevaba gestándose siete años, y que se debería haber rubricado los días 28 y 29 de noviembre en una cumbre en Vilna (Lituania). El 24 de noviembre, los partidos de la oposición convocaron una protesta en Kiev que reunió entre 100.000 y 200.000 personas. El sábado siguiente salieron de nuevo a la calle varias decenas de miles de personas; ese día, el 30 de noviembre, la policía antidisturbios atacó brutalmente la manifestación con el resultado de casi un centenar de heridos. Las escenas de la represión policial provocaron una enorme indignación y al día siguiente decenas de miles se manifestaron por todo el país. Los representantes del imperialismo rápidamente mostraron su indignación por la actuación policial, una posición totalmente cínica e hipócrita si la comparamos con su silencio ante escenas similares de represión en Grecia, España, Portugal o Italia en manifestaciones contra las políticas de austeridad impuestas por la UE.

Sería un error creer que los que han participado en las protestas forman una masa reaccionaria homogénea que se identifica totalmente con los líderes de la oposición que desencadenaron inicialmente el movimiento. En la manifestación del 31, convocada para denunciar la intervención salvaje de la policía, se incorporaron otros sectores de la sociedad, como estudiantes y activistas sindicales, que dieron un carácter distinto a las protestas. De hecho, en aquella manifestación la consigna de entrada en la UE quedó relegada y se generalizó la exigencia de dimisión del gobierno y la denuncia de la grave situación económica que vive el país que, sin duda, es también una de las causas fundamentales del creciente descontento que existe entre sectores amplios de la sociedad. Desde entonces, las distintas manifestaciones convocadas por la oposición no han conseguido los resultados de asistencia esperados.

¿Una oposición democrática?

Nada más iniciarse las protestas, los representantes del imperialismo europeo y norteamericano las presentaron como un movimiento a favor de la democracia, la libertad y la Unión Europea, apresurándose a reconocer a los líderes de la oposición como los auténticos defensores de los derechos democráticos del pueblo ucraniano. Pero si de algo carece esta oposición es de las credenciales democráticas que le otorga el imperialismo occidental.

Este conglomerado opositor, favorable a la entrada en la UE, está formado por tres partidos políticos. El principal es el Partido de la Patria, encabezado por la ex primera ministra Julia Timoshenko, encarcelada desde 2011 tras ser condenada por abuso de



poder. Esta organización mantiene estrechos lazos con la CDU alemana y desde 2008 tiene el estatus de miembro observador en el Partido Popular Europeo. El segundo grupo es la Alianza por la Reforma Democrática, dirigido por el excampeón mundial de boxeo Vitali Klitschko, que también cuenta con el apoyo de la derecha alemana y europea. Hace unos años el gobierno alemán entregó a Klitschko la cruz al mérito nacional en reconocimiento por sus servicios en las relaciones ucranio-alemanas. Y por último, está Svoboda (Libertad), una organización de extrema derecha vinculada a partidos neonazis europeos.

Obviamente hay un sector de la población que aunque no simpatice con este conglomerado reaccionario, esta cada día más hartos de los oligarcas ucranios que gobiernan el país, y que tienen muy buenas relaciones con el otro gran oligarca que sienta sus reales en el Kremlin, Vladimir Putin. Estos oligarcas se conocen muy bien, pues han hecho su carrera política al abrigo del estalinismo y hoy son capitalistas corruptos que no hacen ascos a la tradición reaccionaria.

La lucha por el control de Europa del Este

El acuerdo de asociación con la UE es importante para los intereses del imperialismo europeo y norteamericano en Europa del Este porque socavaría política y económicamente la influencia rusa en la región, desequilibrando la correlación de fuerzas que actualmente existe en el este europeo. El gran perjudicado de la firma de este acuerdo sería Rusia que lleva años presionando a los distintos gobiernos ucranianos para evitar que el país escape a su influencia, y desde hace tiempo lleva a cabo una intensa campaña de presión para impedir que firme dicho acuerdo.

Como estamos viendo en África y Asia, detrás del enfrentamiento de las distintas potencias imperialistas en Ucrania hay intereses económicos y geoestratégicos fundamentales para los intereses del imperialismo occidental y ruso. No sólo se trata de un país con una población de casi 46 millones de habitantes y que representa el mercado interno más grande del este europeo. Ucrania además es una fuente importante de materias primas, sobre todo minerales como el litio o el cromo; además el 80% del gas que Rusia vende en Europa pasa por territorio ucraniano. El otro aspecto relevante es su localización geográfica que le da un significado de primer orden. Ucrania se encuentra entre Europa y Asia Central, per-

mitiendo el acceso de Rusia al Mar Negro y al Mediterráneo.

Los últimos acontecimientos además se producen en medio de profundas tensiones militares y políticas entre Rusia y los gobiernos occidentales. Recientemente el ministro de Defensa ruso confirmó al periódico alemán *Bild* que su gobierno ha desplegado varios sistemas de misiles nucleares en la frontera polaca, frente a las baterías de misiles norteamericanas que se encuentran en territorio polaco al otro lado de la frontera. China también está extendiendo su influencia y se ha convertido en un aliado de Moscú en la región. El gobierno chino ha otorgado préstamos al gobierno ucraniano por valor de 10.000 millones de dólares. Una muestra de la importancia de las relaciones con China es que al cuarto día de iniciarse las protestas, el presidente de Ucrania viajó a China para tratar sus relaciones comerciales. Todos estos datos y hechos dan fe del carácter explosivo de la situación.

Las condiciones del ingreso en la UE

La presión de Rusia sin duda fue un factor importante en la negativa del gobierno ucraniano a firmar el acuerdo, reforzada por la oferta de ayuda económica rusa. Esta semana Putin anunció préstamos por valor de 15.000 millones de dólares, la misma cantidad que ofrecía el FMI, y recortes importantes en el precio del gas. Gazprom ofrece gas a 268,5 dólares los mil metros cúbicos, un precio bastante inferior a los 400 dólares que cobra en la actualidad.

El otro factor para el rechazo del acuerdo, y quizá el más importante, han sido las condiciones económicas que implicaba la integración de Ucrania en la UE. El gobierno ucraniano temía, con razón, que cumplir las exigencias de la UE pudiera desencadenar una explosión social que pusiera en peligro la reelección del presidente Yankovich en las elecciones de 2015. La UE exigía recortes económicos drásticos y la liberalización total de la economía. El FMI había prometido un préstamo de 15.000 millones de dólares, pero hasta ahora sólo había pagado el 20% de dicho préstamo, el resto estaba condicionado a la aplicación de las medidas de austeridad. Entre otras medidas se exigía un aumento del 40% en los precios energéticos y congelación salarial, de aplicarse estas dos medidas supondría un incremento importante de la pobreza.

Como estamos viendo en Europa, las medidas de austeridad exigidas por la UE

lejos de solucionar la situación económica de los países en las que se aplican, sólo sirven para agravar la crisis y condenar a millones de personas a la pobreza. En el caso de Ucrania sería una auténtica catástrofe dada su situación económica.

Aunque haya sectores de la población que apoyen la entrada en la UE como una expresión de su frustración ante la crisis que vive el país, sólo basta mirar la situación en la UE para comprender que no es la solución. Como tampoco es una alternativa la oposición ucraniana que ya demostró hace unos años que es tan corrupta y está igualmente vinculada a los intereses de la oligarquía como el partido en el gobierno. Tras la "revolución naranja" de 2004, alentada y financiada por el imperialismo occidental con la intención de instalar a un gobierno títere en Ucrania que garantizase los intereses imperialistas, los que hoy están en la oposición llegaron en ese momento al gobierno. El poder de los oligarcas permaneció inalterable, el nivel de vida de la población continuó cayendo y finalmente perdieron las elecciones frente al proruso Partido de las Regiones de Yukanovich.

Ausencia de una alternativa independiente

El Partido Comunista Ucraniano, que en los años noventa cosechó importantes éxitos, ahora se encuentra en una posición mucho más débil debido, entre otros factores, a que su dirección se ha plegado también a los intereses de los oligarcas. Su postura en la crisis actual es lamentable: su alternativa es la celebración de un referéndum sobre la entrada en la UE. La clase obrera ucraniana necesita levantar una alternativa política revolucionaria y socialista, con un programa de clase capaz de hacer frente a los intereses de la oligarquía y del imperialismo occidental. Y cuanto más se retrase en construir una organización de masas con este programa, más fácil será la proliferación de todo tipo de ideas confusas, y que los líderes de la oposición y el imperialismo, tanto ruso como occidental, puedan manipular el descontento que existe entre la mayoría de la población en provecho de sus propios intereses. Los aliados de la clase obrera ucraniana no están entre los gobiernos de la UE, EEUU o Rusia, sino en los trabajadores de Europa y de todo el mundo, que se enfrentan a los mismos problemas y luchan contra el mismo enemigo común, el sistema capitalista.

Puedes leer el artículo completo en www.elmilitante.net

Yassin ben Salem

El 15 de noviembre la Coordinadora Nacional de los Profesores Licenciados de Marruecos, nacida en 2009 de una escisión del Sindicato de Profesores Unión Marroquí del Trabajo (UMT), convocó una huelga indefinida contra el decreto que excluye a los profesores licenciados designados en el curso 2012/13 de la promoción de la escala 9 a la escala 10, con una rebaja salarial de alrededor del 20%, después de varios días de negociaciones con el Ministerio de Educación.

Aproximadamente 5.000 profesores llegaron a la capital, Rabat, provenientes de diferentes ciudades del país para iniciar las acciones contra la ley. Los manifestantes, que llevan ya seis semanas de huelga en el momento de escribir este artículo [6 de enero] han confirmado que no abandonarán la capital hasta que consigan sus derechos legítimos y que están dispuestos a poner en práctica todas las formas de lucha.

Los profesores han llevado su protesta a la sede del Parlamento, al Ministerio de Educación, al Ministerio de la Función Pública y a la sede del partido gobernante (el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo). Estas marchas se han convertido en una verdadera molestia para el gobierno, sobre todo porque las protestas de los profesores han coincidido con otras manifestaciones de los licenciados en paro en la capital.

Salvaje represión

Ante el temor de que la situación escalara a un plano verdaderamente peligroso, la policía antidisturbios, que ha vigilado a los profesores en todas sus movilizaciones, ha car-

Huelga indefinida de los profesores en Marruecos



gado contra los manifestantes el 3 de diciembre después de una marcha a la sede del Gobierno y al Ministerio de la Educación. La carga ha dejado varios detenidos y decenas de heridos que han sido atendidos por sus compañeros ante la ausencia de atención médica. El 5 de diciembre se repitió la carga policial contra los profesores en una concentración frente a la sede de la Jefatura de Recursos Humanos del Ministerio de Educación. La política de palo y zanahoria, no desanimó a los manifestantes, que están determinados a seguir su lucha hasta el final, así que el gobierno ha recurrido a la estrategia de amenazar con recortar los

saldos de los profesores en huelga y amenazarlos también con el despido si no regresan a sus puestos de trabajo, alegando ausencia no justificada.

Este sector de la clase trabajadora marroquí no es el único que está sufriendo la precariedad de las condiciones del trabajo y los ataques de la burguesía de Marruecos a través de su gobierno, que los justifica por la crisis económica mundial. Es el caso de los funcionarios de la administración pública, que han convocado concentraciones en varias ciudades para el 6 de enero. Del mismo modo, los trabajadores de las minas de la región de Ouarzazat, que pertenecen al

grupo Managen, del holding real que agrupa a las empresas participadas por Mohammed VI, llevan más de un año y medio de una lucha heroica que cuenta con el apoyo total de la población de la región.

Un régimen agotado

Todos estos ataques ocurren bajo el silencio cómplice de la dirección burocrática y oportunista de los sindicatos mayoritarios —UMT y Unión General de los Trabajadores de Marruecos (UGTM)—, que comparten muchos intereses con el Majzen (la clase dominante en Marruecos), como es el caso de Hamid Chabat, a la vez secretario general de la UGTM y del partido burgués nacionalista Istiqlal (Independencia). Estos dirigentes luchan solo por las migajas en el reparto de los superbeneficios de la burguesía marroquí.

Las movilizaciones que experimenta Marruecos muestran claramente el agotamiento de un régimen fracasado. Ninguna de las reformas y maniobras que ha adoptado el régimen después de las movilizaciones que ha habido tras la *Primavera árabe* ha mejorado la situación. Las reformas desde arriba no cambiarán nada en las condiciones de vida la clase trabajadora: el único camino para un verdadero cambio es la reorganización de los sindicatos desde las bases y la construcción de un partido revolucionario con una teoría marxista revolucionaria para acabar de una vez con la explotación y la precariedad.

La ley del aborto del PP y el regreso del franquismo

VIENE DE LA CONTRAPORTADA

Este tipo de malformaciones provocan una vida de enorme sufrimiento físico a los que las padecen, con consecuencias tan graves como la parálisis de ambas piernas o parálisis completa, incontinencia, atrofia en los músculos de las piernas, deformaciones, hidrocefalia o deficiencia mental. Todo esto sin tener en cuenta la multitud de operaciones a las que un niño con este problema se tiene que someter durante años y que hace imposible, entre otras cosas, una escolarización normal, y las consecuencias obvias que esto tiene en sus familias.

Los programas de prevención de la espina bífida en el Estado español, entre los que se incluye el diagnóstico prenatal que identifica este tipo de lesiones, han logrado que la cifra de niños con espina bífida esté a niveles de 8 por cada 10.000 recién nacidos. Programas que para el PP parecen no tener razón de ser. Tan escandaloso es este tremendo retroceso que desde la propia comunidad científica se ha respondido al PP con una gran contundencia, es el caso de los expertos en diagnóstico prenatal que se han pronunciado públicamente en contra de la ley Gallardón argumentando que la supresión del aborto por anomalía fetal grave vulnera los derechos de las mujeres y las desampara en situaciones muy complejas y dolorosas.

Una cuestión de clase

Pero el problema no es únicamente que se elimine el supuesto de malformación fetal. El empeño del Partido Popular en llevar a cabo una campaña insultante contra las mujeres que deciden abortar no ha cesado en intensidad. Desde las afirmacio-

Satisfacer la moral podrida de la jerarquía católica a costa de los derechos de las mujeres

nes de diputadas del PP en el plenario del congreso: “las mujeres que abortan son las que menos estudios tienen”; o acusaciones de asesinatos tanto para las mujeres que abortan como para los médicos que las atienden, vertidas por el presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, el mismo sujeto que ocultó la gravedad del accidente del metro de Valencia: “...recordamos que todavía en pleno siglo XXI hay legisladores, jueces, médicos, que pretenden hacer lo mismo que hace dos milenios llevó a cabo Herodes (...) si la matanza de inocentes fue una aberración entonces, lo es ahora, aunque en cada momento se intenta vestir con diferentes excusas”. Todo ello en aras de arrebatar a las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo y su reproducción para otorgárselo a la Iglesia católica, a los diputados del PP y a los tribunales.

Quien tiene que tomar la decisión de abortar no lo hace ni mucho menos como plato de gusto sino todo lo contrario. Se trata de una decisión difícil y traumática, pero lógicamente preferible en cualquier caso a tener hijos en unas condiciones físicas y sociales que no puedan garantizar su desarrollo y una vida digna.

Al PP no le preocupa reducir el número de abortos. Si así fuera no impulsarían esta ley ya que, según los datos del propio Ministerio de Sanidad, el número de interrupciones voluntarias del embarazo bajó un 5% en 2012, bajo una ley que permitía entre otras cosas la interrupción libre del

embarazo durante las primeras catorce semanas. Ese año abortaron 112.390 mujeres, unas 6.000 menos que en 2011 con la legislación anterior.

Lo que le ocurre al Partido Popular es que no puede esconder el tufo atrasado y reaccionario que corre por sus venas y que es una de sus principales señas de identidad. En vez de prevenir embarazos no deseados con educación sexual en la escuela pública, lo que intentaron hacer hace pocas semanas fue imponer que la religión fuese una asignatura de oferta obligada para niños de educación infantil. Eso sí es realmente importante para ellos. Explicar a los niños de cuatro años lo que la Santa Iglesia nos tiene que decir. Cosas como que las mujeres deben ser sumisas y que por tanto no pueden tener capacidad para decidir por sí mismas, como predicaba el libro editado por el Arzobispado de Granada titulado *Cásate y sé sumisa*.

La demagogia de Gallardón cuando dice que quiere proteger a las mujeres con esta ley es incalificable. Está claro que este gobierno retrógado no pone ningún empeño en defender los derechos de las mujeres, por ejemplo, en que tengan unas condiciones laborales dignas e iguales a los hombres; tampoco protege a las madres solteras que están en paro y son desahuciadas; y desde luego no protege a las mujeres cuando les niega el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y su propio futuro bajo amenaza de ser condenadas como si fueran delincuentes.

Esta nueva ley del aborto va a suponer un retroceso tremendo que tendrá sus peores consecuencias para las mujeres y las familias trabajadoras. Las que sufren el paro y no tienen medios para mantener a un hijo, las que no podrán hacerse cargo de los costes médicos de un niño con malformaciones. Esta política volverá a repetir las escenas de abortos clandestinos en clínicas de mala muerte, con graves riesgos para la salud tanto de la madre como del feto. Y por supuesto no afectará igual a todos. Las familias con recursos económicos podrán hacer como antes y enviar a sus hijas a abortar a Londres o tener todos los medios disponibles para mantener a un hijo, aunque sea no deseado. Como siempre, el PP golpea a las familias trabajadoras y pretende quitarnos hasta el último de nuestros derechos.

Defendemos el derecho al aborto libre y gratuito a través de la Seguridad Social y en las mejores condiciones mediante una ley de plazos que permita a las mujeres tomar sus propias decisiones sobre su cuerpo, su maternidad y su vida. Este gobierno no defiende los derechos de la mayoría de la sociedad, de las familias trabajadoras, y por eso le importa muy poco el escenario de drama social, de paro, de bajos salarios, de destrucción de la sanidad y la educación públicas que ellos mismos están provocando. Sólo la lucha y la organización harán posible invertir este escenario y garantizar unas condiciones de vida dignas, y plenos derechos y libertades, para millones de personas.

Respuesta a las medidas represivas del PP

Euskal Herria: 130.000 manifestantes en Bilbao en defensa de los derechos democráticos

Eloy Val

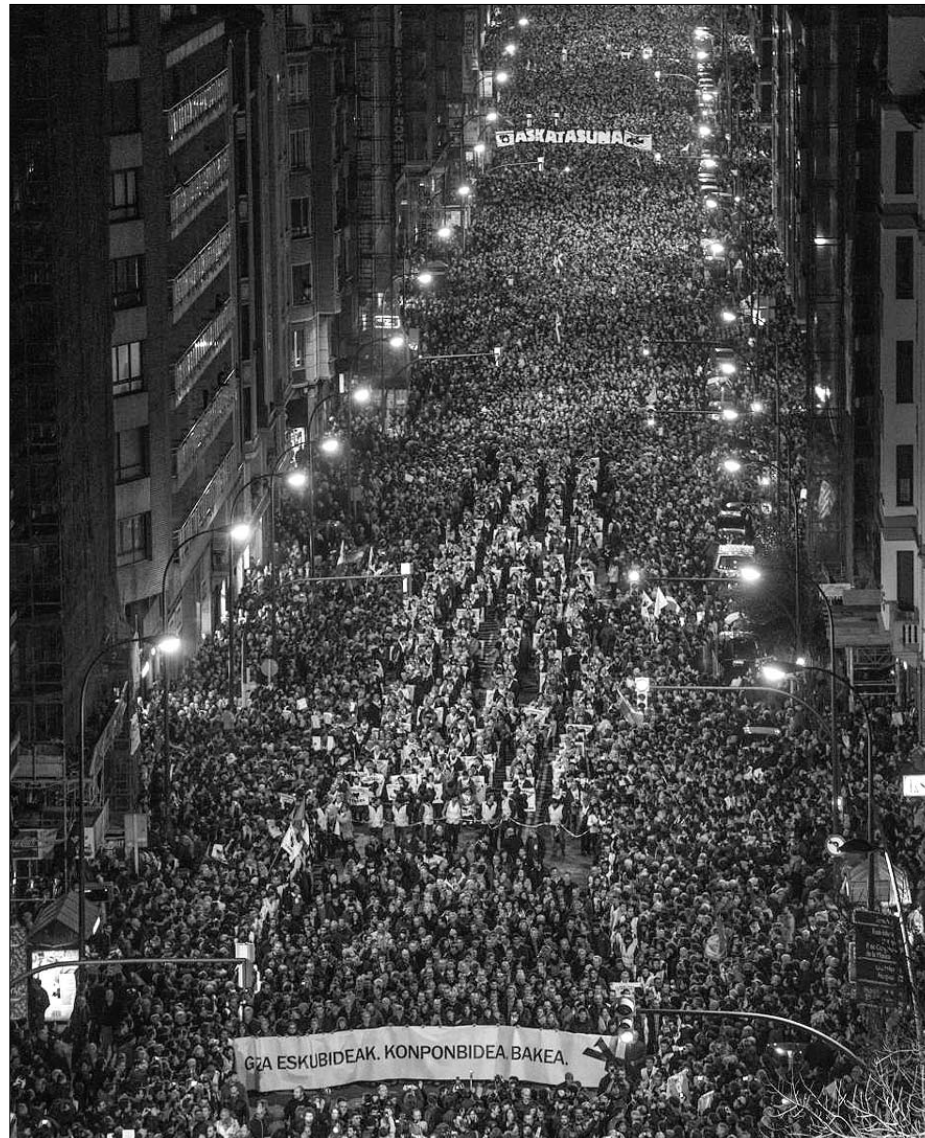
En respuesta a las detenciones y a la prohibición de la manifestación organizada por el colectivo Tantaz Tanta (Gota a Gota) a favor de los derechos democráticos de los presos, el pasado 11 de enero Bilbao se abarrotó. La manifestación, en la que se calcula que han participado 130.000 personas, ha sido la más numerosa que se recuerda. Una respuesta multitudinaria a favor de los derechos democráticos tras una semana vertiginosa en la que se pasaba de escuchar, con esperanza, el comunicado de los presos políticos vascos (EPPK) y del sector más duro de ETA a favor de la lucha política, a la frustración por la respuesta del Gobierno de Rajoy y del aparato del Estado, deteniendo a los abogados que hacían de mediadores de los presos e ilegalizando la manifestación que se llevaba preparando concienzudamente desde hace meses por parte de la izquierda abertzale en cada barrio y pueblo.

Algunos de los manifestantes daban las gracias irónicamente, “Velasco eskerrik asko”, aludiendo al juez que la víspera había declarado ilegal la manifestación. No ha sido la movilización de todos los años por los derechos de los presos, ha sido algo más, coincidía todo el mundo. Este ambiente de ánimo y confianza que se respiraba no lo alimentaba, sin embargo, la presencia del PNV, que a última hora se adhirió a la manifestación y que muchos calificaban de oportunista.

Las maniobras del PNV y el papel del PSOE

A pesar de que la manifestación no fue autorizada por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno hasta media hora antes de comenzar, los accesos a la calle Autónoma estaban ya absolutamente colapsados. Decenas de miles de personas ya habían decidido que participarían. Nadie esperaba ni le importaba la decisión que tomase la Audiencia Nacional. Esa es la razón que movió al PNV a intentar ponerse al frente de la misma, sabiendo que no podía enfrentarse al movimiento desatado por la cerrazón del Partido Popular. Las entrevistas a distintos dirigentes del PNV que publicó *El Correo* lo confirman: “El PNV reconoce que una de las principales razones que le llevaron a convocar el acto con la izquierda abertzale fue tratar de controlar una situación imprevisible en la que, a buen seguro, se habría visto obligada a intervenir la Ertzaintza por orden de la Audiencia Nacional”.

Al PNV los derechos democráticos le importan lo mismo que al PP. Ellos defienden sus intereses de clase y sus privilegios. Contrariamente a lo que se piensa desde la dirección de la izquierda abertzale, un frente democrático consecuente jamás tendrá entre sus filas al partido de la burguesía vasca. En todos los acontecimientos decisivos en la historia de Euskal Herria, la postura del PNV ha sido siempre la de situarse al lado del capital. No en vano ha aplicado las medidas represivas dictadas desde los gobiernos de Madrid sin mayor problema, y se ha alineado con la política de contrarformas y ajustes sociales.



Sin embargo, ha sido mucho más lamentable el papel de los dirigentes del PSE-PSOE, que se han unido al PP criticando al PNV por convocar la manifestación, en lugar de haber dado ellos ese paso formando un frente de izquierdas a favor del derecho democrático de manifestación y expresión. La socialdemocracia es tan responsable como la derecha de la polarización en líneas nacionales que vive Euskal Herria y Catalunya, al haber abandonado un punto de vista de clase y consecuentemente democrático, y tener su mirada puesta en los intereses del aparato del Estado y del nacionalismo español.

El comunicado de los presos y la actitud del PP

Desde que la izquierda abertzale decidió apostar por las vías políticas y desde que ETA, hace ahora dos años, mostrase su apoyo poniendo fin a sus acciones armadas, se consideraba que la actitud del colectivo de presos iba a ser un factor clave. Que el debate interno no ha sido fácil lo corrobora el hecho de que hayan tardado dos años en pronunciarse a favor de continuar dando pasos unilateralmente, dejando definitivamente atrás las bombas y los atentados a pesar de que no haya sobre la mesa ni amnistía, ni tan siquiera un inminente acercamiento de los presos a las cárceles vascas dada la postura inmovilista del Gobierno de Rajoy.

El PP ha respondido a la decisión de ETA de abandonar las armas con saña, manteniendo en la cárcel a los dirigentes de Sortu que han promovido su abandono, investigando, criminalizando y deteniendo a los activistas de Herrera y a los mediadores del EPPK. Cuando el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo salió al paso dero-

gando la doctrina Parot, el Gobierno del PP respondió impulsado en octubre de 2013 el mayor macrojuicio de los celebrados desde la ilegalización de la izquierda abertzale contra 72 jóvenes y dirigentes de la izquierda abertzale, que hacían actividad política legal, acusándolos de pertenecer a una organización terrorista tras dos años sin acciones violentas.

El PP —que se opone y resiste con todas sus fuerzas a reconocer los crímenes del franquismo que se cuentan por decenas de miles, y que ha dado amparo a torturadores recientemente reclamados por la justicia argentina, como el ex inspector Juan Antonio González Pacheco alias *Billy el Niño* y otros— es quien está poniendo palos en la rueda a la izquierda abertzale para que fracase en el camino emprendido. Así se entiende que, en respuesta al comunicado de los presos, el Partido Popular haya ordenado una macrorredada contra los mediadores del EPPK y abogados de los presos. Obviamente, estas detenciones del 8 de enero, lejos de facilitar el proceso de disolución de ETA, han sido un intento de frenarlo y obstaculizarlo desde el PP, que parece añorar el anterior escenario en un momento de lucha social masiva contra sus políticas. Parece como si el ministro del Interior, además de cuidar a su electorado más fanáticamente ultraderechista, quisiese animar a quienes estén a favor de provocar una escisión en ETA y en la izquierda abertzale.

Estas maniobras, sin embargo, se han convertido en su contrario. Como demuestra la manifestación de Bilbao, el apoyo al acercamiento de los presos políticos vascos a las cárceles de Euskal Herria y la exigencia al Estado de que deje de usar a los presos y sus familiares como rehenes, tiene un respaldo masivo.

Los derechos democrático-nacionales y la lucha por el socialismo

La existencia de ETA permitió a un sector del aparato del Estado mover, sin tener que ser justificados, miles de millones de euros de los fondos reservados para la lucha anti-terrorista. Privilegios y prebendas que se extendieron al sector de la seguridad privada que se ha beneficiado igualmente de miles de millones de euros. Y a ese mismo aparato del Estado y al ala más conservadora de la burguesía, no les preocuparía la existencia de un “terrorismo” de baja intensidad con el que poder polarizar la situación en líneas nacionales, desviando la atención de los efectos de la crisis y los recortes sociales. La existencia de un “terrorismo” de ese tipo les daría también la coartada para mantener la legislación regresiva con los derechos democráticos, como por ejemplo la Ley de Partidos, que durante más de una década ha ido recortando las libertades de expresión, de manifestación y de organización.

El PP y el reaccionario aparato del Estado que representa, y que nunca ha sido depurado desde la dictadura franquista, necesitan apuntalar la política represiva en una época de crisis aguda del capitalismo como la actual, en la que existe una fuerte resistencia social a su política de recortes. La *ley mordaza*, o las multas a militantes del SAT-SOC y a decenas de sindicalistas y activistas obreros y juveniles en todo el estado, ilustran la decisión de la derecha para frenar y obstaculizar las luchas de la clase trabajadora y la juventud por unas condiciones de vida dignas.

Para los marxistas, la postura de los presos políticos vascos tiene una gran trascendencia. La decisión que han tomado favorable al proceso de paz representa un gran salto adelante ya que se está poniendo punto y final a la táctica inútil del terrorismo individual, a las bombas y atentados que únicamente servían como excusa al aparato del Estado para fortalecerse y recortar los derechos democráticos conquistados por la clase trabajadora con grandes luchas frente a la dictadura franquista. Ahora, después de la experiencia histórica, es más necesaria que nunca una alternativa socialista y revolucionaria frente a la crisis del capitalismo.

En los dos últimos años la clase trabajadora vasca también ha sufrido las dramáticas consecuencias de la recesión. Las subidas de los precios y la congelación de los salarios, (160.000 trabajadores empiezan 2014 sin convenio), el azote del paro tras el cierre de numerosas industrias, la crisis del Grupo Fagor, y los duros recortes del PP, UPN y del PNV en materia social, en educación y sanidad, como el copago, están creando un ambiente de descontento social enorme. Está en manos de la clase trabajadora de Euskal Herria, unida por encima de fronteras nacionales con sus hermanos de clase de los estados español y francés, vincular la defensa de un programa auténticamente socialista frente a la crisis del capitalismo con la bandera del derecho de autodeterminación para las nacionalidades históricas. La solución satisfactoria a los problemas que la burguesía ha sido históricamente incapaz de resolver, como la cuestión nacional en el Estado español, reside en la lucha por la transformación socialista de la sociedad con una política de independencia de clase. Ese es el reto que hoy tiene planteado la izquierda abertzale.

¿Cómo y al servicio de quién funciona el sistema financiero?

El 'caso Blesa' y la corrupción en Caja Madrid

Antonio García Sinde

Las últimas noticias sobre las investigaciones del gigantesco cúmulo de delitos que caracterizaron durante los últimos años la gestión de Caja Madrid —hoy Bankia— van mucho más allá de los casos habituales de corrupción y desvelan una pequeña parte de la verdadera realidad del funcionamiento del sistema financiero, más parecida a la de una banda de salteadores que a la pretendida imagen pública de respetables "capitanes de empresa".

Y a pesar de que la investigación abierta sobre Bankia no ha podido dar más que unos pequeños pasos antes de quedar paralizada por las maniobras de los órganos del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado, que se han apresurado a intentar echar tierra sobre el asunto, los correos encontrados en el ordenador de Miguel Blesa, presidente del Consejo de Administración de Caja Madrid desde 1996 hasta 2009, desvelan la punta del iceberg de corrupción, delito y estafa que constituyen el día a día del sistema financiero.

La estafa de las preferentes

Lo primero que resalta al leer los correos de Blesa es la parsimonia con la que organiza la gigantesca estafa de las participaciones preferentes, una modalidad de deuda perpetua, con grave riesgo de iliquidez, y con unas condiciones de rentabilidad draconianas. Cientos de miles de personas, muchas de ellas de edad avanzada, invirtieron sus ahorros en este producto cuando, como demuestran los correos, la cúpula de Bankia ya era plenamente consciente de que era completamente imposible no ya pagar los intereses prometidos, sino incluso devolver a los preferentistas la totalidad de su inversión.

Naturalmente, ni el propio Blesa ni sus compinches del Consejo de Administración se enredaron en su propia estafa. Invirtieron cantidades pequeñas en preferentes para evitar que cundiera la desconfianza entre los empleados de la entidad pero mantuvieron su patrimonio a salvo. El propio Blesa, que en el momento de lanzamiento de las preferentes disponía de un montante de cinco millones de euros para invertir, limitó su riesgo a 150.000 euros. Esta cantidad puede pa-



recer enorme, pero teniendo en cuenta que el sueldo anual de Blesa se elevaba a tres millones de euros, su inversión en preferentes representa un magro 5% de sus ingresos de un solo año.

Pero además del sueldo, Blesa disponía de una tarjeta de crédito para sus "pequeños gastos" con un saldo disponible de 50.000 euros, totalmente opacos para Hacienda, y de vez en cuando organizaba un crucero de lujo o se compraba un coche de medio millón de euros, todo ello por cuenta de Bankia.

A la vista de todo esto alguien podría preguntarse: ¿Pero es que nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando en Bankia? ¿Cómo es posible que las autoridades —el Banco de España, el Ministerio de Economía, la Agencia Tributaria— no detectasen ni una sola irregularidad? ¿Cómo es posible que permaneciesen ciegas ante la montaña de delitos que se estaban cometiendo?

La razón de esta impunidad es que Blesa no gestionaba Bankia para su único beneficio y el de sus compinches del Consejo. Desde Bankia se gestionaban operaciones financieras de enorme alcance, de las que se beneficiaban importantes personalidades políticas y empresariales y, además, se mantenía una gigantesca red de favores al servicio de los dirigentes del PP.

¿A qué se dedicaba realmente Bankia?

Los correos de Blesa descubren un fastuoso mundo de favores del que disfrutaron numerosos dirigentes del PP. Bankia operó durante años como una agencia de colocación para el PP, y cargos de ese partido consiguieron puestos directivos no solo en la propia Bankia sino en empresas participadas

como Reial o Iberia. Por ejemplo, Mercedes Rojo, secretaria personal de Esperanza Aguirre, acabó en los consejos de cinco empresas, entre ellas Iberia y Mapfre.

Y además de altos puestos directivos, los militantes del PP y destacados empresarios conseguían créditos en unas condiciones envidiables, a pesar de que a los directivos de Bankia les constaba que en muchos casos ese dinero no sería devuelto, como efectivamente ocurrió con el crédito de 26,6 millones de euros concedido al exjefe de la patronal —y reconocido delincente— Gerardo Díaz Ferrán.

Entre estos favores destaca, por su desmesura, el intento del expresidente Aznar de que Bankia comprase por 54 millones de euros una colección de obras de arte que no valía ni la décima parte de ese dinero. Ante las explicaciones de Blesa sobre las dificultades de justificar esta operación, los correos incautados dan cuenta de las presiones del hijo de Aznar y otros dirigentes del PP, así como de la participación en esta provechosa operación de Alberto Ruiz-Gallardón, en aquel entonces alcalde de Madrid.

Pero sin duda, la parte más sustanciosa de los correos de Blesa es la que deja entrever el trasfondo de determinadas operaciones financieras de Bankia. Sin duda, han sido estos indicios de que la gestión fraudulenta de Bankia, que ha costado a los trabajadores del Estado español cerca de 24.000 millones de euros, va mucho más allá de las corruptelas antes mencionadas, lo que ha provocado el parón de la investigación y las sanciones al juez que investigaba el caso, que ya ha sido apartado de la instrucción.

La más significativa de estas operaciones fue la compra en 2008 por Bankia del City National Bank, un banco norteamericano

no con sede en Miami, por 620 millones de euros. Esta compra resultó ser un negocio ruinoso de gigantescas proporciones ya que en unos meses Bankia perdió más de 500 millones de euros. De forma similar, Bankia adquirió otras entidades financieras, especialmente en América Latina, que, como la hipotecaria mexicana Su Casita, no tardaron en quebrar. Tan poco tino en estas compras tiene una única explicación: la existencia de ingentes comisiones ilegales u otros beneficios ocultos para sus promotores.

Al mismo tiempo que Bankia hacía estas compras ruinosas también realizaba importantes ventas de activos que resultaron ser un gran negocio para el núcleo dirigente que controla la vida política y económica del Estado español. Así, al mismo tiempo que el hijo de Aznar presionaba a Blesa en nombre de su padre, encontraba tiempo para colocarse como socio de la sociedad de inversión norteamericana Cerberus Capital Management, que siete meses después de este "fichaje" recibe de Bankia la gestión por diez años de sus activos inmobiliarios a cambio de un precio que variará entre 40 y 90 millones de euros, en función del beneficio que Cerberus pueda obtener de esos inmuebles. Y tampoco Aznar padre perdió el tiempo. Los correos de Blesa indican que Bankia apoyó los intentos de Aznar de hacerse un hueco como comisionista de la industria armamentística actuando como intermediario en operaciones de venta de armas a Libia y Argelia.

Todo esto es una pequeña muestra de cómo, y al servicio de quién, funciona el sistema financiero. El caso Bankia se complementa con el de los "papeles de Bárcenas" —cuya investigación llevó a la intervención policial en la misma sede central del PP el pasado diciembre—; el caso Nóos, por el que la infanta ha vuelto a ser imputada y que involucra a altos cargos del PP; o los casos de corrupción que envuelven a CiU —el principal socio del PP en la política de recortes sociales— como el caso Palau, y bastantes otros. Las penurias que estamos atravesando la inmensa mayoría de la sociedad tienen su contrapartida y su origen en la orgía de opulencia de la que disfruta una ínfima minoría. Acabar con este universo de corrupción no es posible si no acabamos con el sistema que lo sustenta, el sistema capitalista, incapaz de ofrecer a los trabajadores otra cosa que miseria y opresión.

¡La lucha sirve! Proliferan las huelgas indefinidas contra cierres, despidos y reducciones salariales

Carlos Ramírez

Cada vez más trabajadores, delegados sindicales y comités de empresa están llegando a la conclusión de que la única forma de frenar la ofensiva patronal es enfrentándose a ella con movilizaciones cuya contundencia esté a la altura de la fuerza del ataque que se pretende frenar. Y cada vez son más numerosos los conflictos en los que los trabajadores se enfrentan a los ataques de la patronal con medidas de presión firmes y contundentes; rechazando los despidos, las reducciones salariales o la pérdida de derechos sin entrar a negociar, de entrada, cuántos despidos o cuánta reducción salarial se va a aceptar, y planteando, por el contrario, huelgas en las que se transmite la idea de

que se puede derrotar a la patronal y de que se está dispuesto a ir hasta el final con firmeza.

Estos métodos son los que están demostrando en la práctica su utilidad. Así fue como los trabajadores de la **limpieza viaria y jardinería de Madrid**, después de una huelga indefinida de nueve días, consiguieron que se retirara el ERE y la reducción salarial que la empresa quería imponerles; o los del **alumbrado y semáforos** también de Madrid que tras tres días de huelga indefinida consiguieron mantener todos los puestos de trabajo y sus condiciones laborales. También los trabajadores del **servicio de recogida de basura de Málaga (LIMASA)** que después de cuatro días de huelga indefinida han conseguido parar el grueso del ataque patro-

nal. En la bahía de Cádiz, los trabajadores de la empresa **SDS** han evitado, de momento, el traslado de una gran parte de la plantilla, lo que en la práctica supondría un paso decisivo para el cierre definitivo de la empresa. Es muy destacable la contundente victoria alcanzada por los trabajadores del **transporte urbano de Alicante** que, con la huelga indefinida, han conseguido evitar el despido de más del 52% de los trabajadores, la supresión de líneas de bus, recortes drásticos en líneas o la supresión del sistema de pago de bonobús. También se podrán en huelga indefinida a partir del 13 de enero los **trabajadores de limpieza del Hospital Ramón y Cajal (Madrid)** en protesta por los planes de Clece de reestructurar la plantilla (63 despidos). Los trabajadores de

Panrico (Barcelona), aunque no han conseguido todavía sus objetivos, llevan más de diez semanas de huelga y están siendo un referente de lucha para todo el Estado. La ocupación de la empresa por parte de los trabajadores de **Tenneco**, en Asturias, va en la misma línea.

Una de las consecuencias de la ofensiva patronal desatada a raíz de la crisis es el haber herido de muerte el modelo sindical dominante durante los últimos treinta años; ese modelo basado en la negociación, el consenso, la paz social y que ha revelado una incapacidad cada vez mayor para frenar los despidos, reducciones salariales y pérdida de derechos laborales. Un nuevo modelo sindical se está imponiendo, el modelo de la lucha contundente, firme, el modelo sindical a través del cual conseguimos los derechos sociales y laborales que hoy los capitalistas y sus representantes en los distintos gobiernos están empeñados en arrebatarlos, algo que no conseguirán.

El gran negocio del sector eléctrico

Rodrigo Pasero

El 29 de noviembre el Gobierno anunció que no iba a aportar los 3.600 millones comprometidos a las eléctricas para acabar con el llamado “déficit tarifario”. Como consecuencia de ello, las empresas eléctricas, que controlan absolutamente todo el mercado de la electricidad, decidieron efectuar el robo de otro modo: incrementando todavía más las tarifas que pagan las familias. Así, el resultado de la llamada subasta CESUR del 19 de diciembre, que afecta a la Tarifa de Último Recurso (TUR), la que pagan la inmensa mayoría de los consumidores domésticos y las pequeñas empresas, implicaba una subida de la TUR de hasta un 11%.

Ante un escándalo que podría tener consecuencias políticas muy importantes el gobierno intervino, dejando la subida finalmente en un 2,3% para el primer trimestre del año. Sin duda, esta subida no será la única de este año y en los próximos meses subirá de nuevo el recibo de la luz como desean las eléctricas. En realidad, a pesar del aparente enfrentamiento entre las eléctricas y el gobierno del PP no hay un choque de fondo entre ellos. Al contrario, hay una total connivencia por parte de los diferentes gobiernos que ha quedado demostrada durante toda la historia del sector eléctrico en el Estado español.

¿Cómo funciona el mercado eléctrico?

Durante los últimos años, mientras que las familias obreras nos teníamos que enfrentar constantemente a subida tras subida del precio de la luz, sobre la base de la llamada liberalización del mercado eléctrico español las empresas eléctricas han conseguido beneficios astronómicos.

Hasta el año 1997, los precios de la factura eléctrica se basaban en los costes de producción de la energía. En este año, el primer gobierno del PP encabezado por José María Aznar aprobó la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico que “liberalizaba” el mercado eléctrico. En realidad, no fue en la práctica una liberalización, ya que el sistema pasó de estar formado por un único monopolio que controlaba toda la red eléctrica a estar formado por un oligopolio que es el que, en la práctica, decide todo lo relacionado con el mercado eléctrico. De hecho, hay cinco empresas que controlan absolutamente todo el mercado en el Estado español: Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP, E.On e Iberdrola. Estas empresas se encargan de la producción de la electricidad, de su distribución y transporte y de su comercialización, participando en todas las fases del proceso incluida la denominada subasta CESUR.

El llamado “déficit tarifario” es la diferencia entre lo que se paga en las tarifas de la luz y el coste estimado, que no real, de la producción de energía que fija el Gobierno. Este déficit es una muestra más del sistema perverso del mercado energético, ya que los costes de producción de energía reales son mucho más bajos que el coste estimado que fija el Gobierno, es decir, que las eléctricas no pierden dinero. La diferencia entre lo que reconoce el gobierno y lo que se aplica en las tarifas finales es la deuda que el Estado tiene que pagar a las empresas eléctricas. De este modo los monopolios de la energía se aseguran siempre suculentos beneficios.

En la reforma energética del gobierno de Rajoy una de las medidas que se contemplaba era la “titulización” de esta deuda, es decir, el gobierno vendió esta deuda en los mercados internacionales para que las eléctricas



podieran hacer efectivo el cobro de dicha deuda y, por lo tanto, ahora la deuda la tiene el Estado español con los mercados internacionales. Con esta medida además de la deuda de unos 24.000 millones de euros, ahora habrá que pagar cuantiosos intereses anuales. Evidentemente, este dinero saldrá de los recortes en educación o sanidad y no del bolsillo de los grandes empresarios y banqueros.

A pesar de la campaña de indignación aparente de las grandes eléctricas, la realidad es que los beneficios de las cinco principales empresas eléctricas del Estado español son cuantiosos. Iberdrola en los primeros nueve meses del año 2013 ganó 2.274 millones de euros. El sueldo total de su consejo de administración, formado por catorce personas, fue de 14,53 millones. E.On en los nueve primeros meses de 2013 ha obtenido un beneficio neto de 1.900 millones de euros; Endesa, 1.551 millones y además repartirá este año entre sus accionistas unos dividendos de 1.588 millones; Gas Natural Fenosa, 1.120 millones y EDP, 792 millones. En total, las cinco eléctricas sumaban hasta septiembre un beneficio neto de 7.638 millones de euros. Estos datos

obscenos se elevan sobre la base de exprimir hasta el último céntimo de las familias trabajadoras.

Especulando con la electricidad

En el año 2009 el gobierno del PSOE creó la Tarifa de Último Recurso, creada aparentemente para evitar que las empresas eléctricas pudiesen manipular de forma artificial el precio de la luz que de este modo se mantenía estable durante cada trimestre. La novedad estaba en que la parte de la factura que se basa en el coste de la producción de energía se calculaba a través de una “subasta” de energía.

La subasta de energía sobre el papel es una subasta virtual donde se puja por el precio de la energía. En realidad, aunque se le llame subasta no es exactamente así, ya que las eléctricas forman parte tanto de la venta como de la compra de energía y por lo tanto tienen asegurados sus beneficios. Además de las eléctricas, participan también grandes financieras, que en muchos casos tienen también intereses en las empresas eléctricas. El mecanismo es el siguiente: los intermediarios apuestan a cuánto van a vender

la electricidad en el siguiente periodo. Después compran energía en el mercado diario y la venden a las comercializadoras al precio fijado. Hasta ahora se han realizado subastas en 18 trimestres, 16 han acabado con beneficios para los intermediarios que son entre otros Morgan Stanley, Goldman Sachs, Royal Bank of Scotland o Deutsche Bank, además de las propias empresas del sector eléctrico. En la subasta del 19 de diciembre, el precio de la electricidad se elevó un 29,95% y habría supuesto un aumento del precio de la factura superior al 10%. Fue tan escandalosa la manipulación de esa subasta que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidió anular el resultado.

Todo este sistema obscuro se ve beneficiado por la vinculación entre las eléctricas y numerosos políticos. El ejemplo más sonado es el del expresidente del gobierno José María Aznar, que es asesor de Endesa (empresa que privatizó) con un sueldo aproximado de 200.000 euros; Miquel Roca Junyent, fue parlamentario por CiU y ahora está en Endesa; el exministro del Interior Ángel Acebes es consejero de Iberdrola con un sueldo en 2012 de 216.000 euros; el también expresidente del gobierno Felipe González está en el consejo de administración de Gas Natural-Fenosa, y así podríamos continuar con una lista interminable de políticos que al acabar su carrera política han sido premiados por las grandes empresas del sector eléctrico.

Mientras muchas familias no pueden pagar la luz, otros se enriquecen descaradamente

Según el último informe de la organización de consumidores FACUA, con la tarifa existente hasta diciembre de 2013, el usuario medio paga 77,37 euros mensuales (60,83 euros más un 27,19% de impuestos). Eso es un 78% más de lo que se abonaba en 2003, cuando la cifra era de 43,47 euros (35,65 euros más un 21,93% de impuestos). Esto quiere decir que en diez años el precio del kw de potencia contratada ha subido un 119%, mientras que la energía consumida ha aumentado un 69%.

Mientras millones de familias se ven obligadas a pasar el invierno sin utilizar la calefacción por falta de recursos económicos, las empresas eléctricas, a pesar de sus desorbitados beneficios, no tienen el menor reparo en cortar la luz a todos aquellos que no puedan pagar. Durante el año 2013, 1.400.000 familias han visto como les cortaban la luz para que los dueños de las empresas eléctricas añadan algunos ceros más a sus cuentas corrientes.

Lo que está claro es que en el mercado energético lo que existe en realidad es un oligopolio, donde un puñado de empresas con un carácter parasitario, que vive de los beneficios que le brinda el Estado y donde el riesgo de sus inversiones es nulo, ya que el Estado garantiza sus beneficios. La situación del sistema energético en el Estado español es otra evidencia de la decadencia del sistema capitalista. Un sector fundamental, que es determinante para la economía y para la vida de las personas, está en manos fundamentalmente de cinco empresas cuyo único interés es sacar el máximo beneficio.

Ante esta situación la única alternativa viable para garantizar unos precios asequibles en la factura de la luz y para acabar con la especulación rampante del sistema eléctrico es la nacionalización sin indemnización de todo el sector eléctrico bajo el control de los trabajadores y de esta forma se pondría un recurso básico como es la electricidad al servicio de la mayoría de la sociedad.

Acto Público en Rivas-Vaciamadrid con Santiago Jiménez, alcalde de Izquierda Unida en Villaverde del Río (Sevilla)



**Viernes 17 de enero - 19:00 horas
Sala Covibar (Avda. de Covibar 8, Rivas)**

El Frente Cívico de Rivas en colaboración con Covibar organizan un Cine-Forum dentro de la campaña que desde abril de 2013 vienen realizando en defensa de los servicios públicos y exigiendo a Izquierda Unida, que gobierna el ayuntamiento de Rivas, que cumpla su programa electoral.

Se proyectará la película *El espíritu del 45*, de Ken Loach, y posteriormente se celebrará un debate con Santiago Jiménez, alcalde de IU en Villaverde del Río, que nos trasladará la experiencia de la remunicipalización de los servicios públicos en su municipio y la lucha contra los recortes sociales.

La cuestión nacional en Catalunya y Euskal Herria está en el primer plano de la situación política. Esto no es ninguna casualidad, tiene una relación directa con la profunda crisis económica, política y social del capitalismo a escala mundial, que en el Estado español se está expresando con especial intensidad. Como en los años 30 y los años 70, también periodos de inflexión histórica, la agudización de cuestión nacional emerge en el Estado español de forma paralela e interrelacionada al recrudecimiento de la lucha de clases.

En el caso de Catalunya, las manifestaciones masivas en la Diada de 2012 y 2013, y la anunciada consulta sobre la independencia para el mes de noviembre de 2014 han sido temas que han tenido gran repercusión y serán objeto de constante debate y polémica en los próximos meses*. Efectivamente, el pasado 12 de diciembre el presidente de la Generalitat, Artur Mas, anunció el pacto alcanzado con los representantes de ERC, Iniciativa y CUP sobre la pregunta y la fecha para un referéndum que se celebraría el 9 de noviembre de 2014. En él se formularía la doble pregunta: “¿Quiere que Catalunya se convierta en un Estado? Y en caso afirmativo: ¿Quiere que este Estado sea independiente?”. En enero, el parlamento aprobará una propuesta de ley por la que se solicita el traspaso de la competencia del Estado sobre la autorización, convocatoria y celebración de referendums consultivos a la Generalitat. En febrero, dicha ley se discutirá en el parlamento español. Pese a la impresión dominante transmitida por los medios de comunicación de que el referéndum es ya un hecho, hay que señalar que Mas ha supeditado su convocatoria a un acuerdo con el gobierno central del PP, o al menos a que esta sea “tolerada”, lo cual es poco probable.

Contra la ofensiva neofranquista en la cuestión nacional

¿Qué posición tenemos los marxistas ante la cuestión nacional en Catalunya y sobre el anunciado referéndum en particular? El primer lugar los marxistas dejamos claro que frente a la brutal ofensiva de la derecha españolista, de los sectores más reaccionario del ejército y del aparato judicial contra los derechos democráticos del pueblo catalán, vasco y gallego, apoyamos estos derechos sin reservas y nos colocamos en la vanguardia de la lucha contra esa ofensiva. Todas las amenazas de represión contra el derecho de autodeterminación, de intervención del ejército en caso de celebrarse el referéndum, de suspensión de la autonomía catalana, de encarcelamiento de los promotores de la consulta sobre la independencia en Catalunya proveniente de estos círculos reaccionarios, no sólo representan un peligro para los derechos democráticos del pueblo catalán, vasco y gallego sino para la clase trabajadora, la juventud y la mayoría de la población de todo el Estado.

Igual que con la LOMCE, con el anteproyecto de Ley del Aborto, con las últimas medidas de represión contra el derecho a manifestación y expresión, el gobierno del PP está lanzando un verdadero órdago reaccionario en la cuestión nacional. Es todo parte del mismo paquete para atacar las conquistas sociales y las libertades democráticas de la clase obrera, tratar de dividirla en líneas nacionales, mantener en estado de histeria a la base más reaccionaria del PP y crear un clima de excepcionalidad para justificar medidas represivas contra la protesta social. Si hay un factor que alimenta las tendencias a favor de la independencia y que enquistaba el problema nacional es precisamente la actitud de la derecha españolista que, no podemos olvidar, es la heredera directa del franquismo y de una maquinaria represiva sin depurar desde la caída de la dictadura, con todo lo que la represión franquista supuso en las nacionalidades históricas. La derecha española no es parte de la solución, es parte fundamental

de todos los problemas, incluido lo relacionado con la cuestión nacional y los derechos democráticos.

La oposición de los marxistas a cualquier tipo de opresión nacional, de mantener por la fuerza y la represión cualquier nacionalidad dentro del Estado español, nuestra defensa del derecho a la autodeterminación del pueblo catalán, vasco y gallego, no nos lleva, en absoluto, a la conclusión de que la clase obrera catalana, vasca o gallega, ni sus organizaciones sindicales y políticas, tengan que subordinarse o alinearse, activa o pasivamente, a los intereses, a los objetivos y a los argumentos de la burguesía catalana o vasca. Este es otro aspecto fundamental del marxismo respecto a la cuestión nacional. Es evidente que no sólo la burguesía españolista, sino también la burguesía catalana y vasca, actúan con su propio guión en la cuestión nacional, engañando, tergiversando, manipulando y utilizando los sentimientos nacionales, el justo rechazo de amplios sectores del pueblo catalán y vasco a los ataques de la derecha neofranquista, y los anhelos de cambio de la mayoría de la población, en beneficio de sus propios intereses de clase.

El ‘Estado propio’ de Artur Mas

La primera cuestión a plantear es ¿qué tipo de Estado defiende Mas y en qué medida este supondría un avance en el terreno de los derechos democráticos y sociales de la mayoría de la población catalana? Lógicamente, CiU está vendiendo la idea de que con un “Estado propio” capitalista, Catalunya podría salir de la crisis, evitar los recortes y garantizar el bienestar de la mayoría de la población. Sin embargo, en un excepcional alarde de sinceridad, en una entrevista con el periodista Jordi Évole realizada en octubre de 2012, dejó bien claro que en este eventual “Estado propio” que proyecta CiU para Catalunya, ni se derogaría la reforma laboral, ni la reforma de las pensiones, ni se revertirían los recortes en sanidad, ni se suprimirían los peajes de las autopistas. Obvio. Incluso reconoció que su política económica seguiría totalmente supeditada al capital financiero alemán y francés, al que, ni por asomo, pretende enfrentarse. Igualmente, en el plano militar, abogó porque Catalunya se apoyase para su defensa en “ejércitos ya existentes”. Por no hablar del tipo de policía que tendría ese Estado pensado por Mas, teniendo en cuenta lo que tenemos ahora con los Mossos y su brutal expediente represivo.

Recientemente, el Consejo de Transición Nacional, compuesto por asesores designados por Mas, recomendaba que el nuevo Estado catalán debería mantener una unión con el Estado español con “cooperación en varios ámbitos: monetario, industrial, fiscal, cultural, infraestructuras, defensa, migraciones...”. El organismo recomienda que el Barça y el Español sigan jugando en la liga española y que las relaciones con España “sean más sólidas que las actuales” pero en el plano de igualdad. ¡Vaya forma de independencia y de autodeterminación más curiosa! El proyecto “independentista” de Mas es abierta y vergonzosamente sumiso con los grandes poderes económicos a los que representa, como se ha demostrado siempre que CiU ha gobernado la Generalitat, y con sus hermanos de clase: el capital español y europeo.

La cuestión nacional

Una política revolucionaria e independiente para parar la ofensiva reaccionaria

Por una República Socialista



Rueda de prensa conjunta de CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP el pasado 12 de diciembre, tras el acuerdo alcanzado sobre la

Todo lo anterior da una idea bastante clara de cómo CiU trafica con los “principios fundamentales”. De hecho, todo el camino recorrido para llegar a esta “consulta”, está trufado por este tipo de cambalaches de la burguesía catalana. Un ejemplo más ha sido la descarada supeditación de la convocatoria de la consulta al apoyo de ERC a los presupuestos de 2014, que supondrán una nueva vuelta de tuerca de los recortes sociales, que en Catalunya son tremendos. A cambio CiU ofrece un pacto que desembocaría, según se desprende de sus propias palabras, en un estado capitalista catalán completamente sometido a los intereses del capital financiero internacional, dominando por la misma oligarquía de siempre y, como hemos visto, con excelentes relaciones con el Estado español. ¿Decidir entre un estado capitalista encabezado por Rajoy o un estado capitalista encabezado por Mas, es realmente llevar a la práctica el “derecho a decidir”, en el sentido profundo de cambiar la realidad social que muchos catalanes interpretan con este objetivo? En nuestra opinión, rotundamente no.

La burguesía catalana ha hecho todo lo posible en los últimos años por situar la cuestión nacional en un primer plano político, y lo ha hecho con dos objetivos centrales: desviar la atención de su salvaje política de recortes sociales y disputar a la burguesía española una parcela mayor de poder en las decisiones políticas, sobre todo en materia económica y presupuestaria. Por supuesto que el plan “independentista” de Mas siempre se podrá posponer por el propio Mas si le conviene o si se llega a un acuerdo entre bambalinas sobre un nuevo reparto de poder y de presupuestos

con la burguesía española, que es lo que realmente persigue.

De hecho, Mas ya tiene trazada una hoja de ruta bien clara en caso de que “no se pueda” convocar el referéndum: dar a las próximas elecciones autonómicas un carácter plebiscitario, eso sí, agotando la legislatura hasta el 2016 para completar la tarea de destrucción de la sanidad y la educación pública. La entrada de ERC en el gobierno se reserva precisamente para esta eventualidad, para dar una imagen todavía más reforzada de gobierno de “unidad nacional” tratando de encubrir así una descarada política de retrocesos sociales.

La bancarrota de los dirigentes reformistas de la izquierda

Uno de los aspectos en apariencia más paradójicos de la situación política en Catalunya es el hecho de CiU, que sufrió un tremendo desgaste por la potentísima movilización social contra su política salvaje de recortes, y que salió claramente debilitada de las elecciones autonómicas anticipadas impulsadas por ella misma en 2012, siga marcando la pauta de la situación política. Como señalamos en otros materiales, la explicación de esta paradoja está en la política de los dirigentes de los partidos de la izquierda, o que se reivindican de izquierdas, y de los sindicatos, tanto en Catalunya como en el resto del Estado. Este aspecto, que está completamente ausente de los análisis habituales sobre la situación en Catalunya, es absolutamente central.

Por supuesto una gran parte de responsabilidad la tiene el PSOE, que se ha alineado en lo fundamental con las tesis del PP

onal en Catalunya

ternacionalista es lo que puede del PP y las maniobras de CiU

República Federal



pregunta del referéndum, y una imagen de la Diada de 2012

en lo referente a la cuestión nacional. Inmediatamente después del anuncio de Mas, Rubalcaba salió públicamente para dejar meridianamente claro que Mariano Rajoy y él lo tenían “todo hablado” y que compartían su frontal oposición al derecho a la autodeterminación, que, según ambos, implicaba la consulta. A principios de enero, Rubalcaba y Navarro, líderes del PSOE y del PSC respectivamente, escenificaron en Barcelona un acuerdo mediante el que, según sus palabras, “echaba a andar” una alternativa entre “separadores y separatistas”, en referencia al PP y a CiU. La pretendida solemnidad de la presentación de dicho programa contrastaba con la irrelevancia de su contenido, que tenía como punto central la “creación de una subcomisión en el congreso para debatir las relaciones entre Catalunya y España”. Por supuesto, esta iniciativa *desafiante* es parte la “apuesta federal” del PSOE. Qué patético.

La propia vuelta de CiU a la Generalitat en 2010, no fue producto de su fortaleza sino de la abstención y la desmovilización electoral de la base social de la izquierda, provocada por la profunda decepción por la política del Tripartit. Tras siete años en la Generalitat con el PSC a la cabeza aplicando una política antisocial y represiva que en muchos aspectos en poco se diferenciaba de la derecha, CiU ganó las elecciones. Ya en la oposición, los dirigentes tanto del PSC como de ICV-EUiA adoptaron una política de seguidismo escandalosa. Aunque se han opuesto de palabra a los recortes, le han tendido la mano constantemente a Mas, haciendo un “frente común” en la cuestión del pacto fiscal. Este punto es muy importante porque durante dos años CiU ha

agitado con diferente volumen, pero de forma constante, la cuestión del déficit fiscal (la diferencia entre lo que Catalunya aporta en recaudación de impuestos y lo que recibe de la caja común) utilizándolo como justificación de la dureza de los recortes sociales en Catalunya y como forma de encubrir el impresionante expolio social que la oligarquía financiera e industrial catalana ejerce sobre la población catalana.

Los dirigentes reformistas de la izquierda han bailado al ritmo marcado por CiU y la patronal, desde el PSC hasta ICV-EUiA pasando por los sindicatos. Los líderes de CCOO y UGT en Catalunya mantuvieron la misma táctica desmovilizadora que en el resto del Estado. La postura de los dirigentes de la izquierda, tanto en el plano ideológico como en la práctica, ha sido decisiva para favorecer el éxito de Mas en su giro “independentista”, contribuyendo a crear ilusiones en que con un nuevo acuerdo de financiación o con la independencia las cosas podrían ir mejor para la mayoría de la población.

Etapismo y colaboración de clases, una vía desastrosa

La escenificación solemne del pacto sobre la pregunta entre CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP es la coronación, de facto, de una política de colaboración de clase que los representantes de la burguesía están explotando a fondo: “todos estamos en el mismo barco en este momento histórico, desde los demócratas cristianos hasta los antisistema”. Los dirigentes de ICV-EUiA y de la CUP, en el mismo escenario que Mas y su consejero de Interior, presentaron este

acuerdo como positivo. Joan Herrera, en nombre de ICV-EUiA, se mostró cómodo con el acuerdo alcanzado, ya que permitía “sumar desde la transversalidad y permite suscitar una gran mayoría a favor de cambiar la relación con el Estado”. Quim Arrufat, diputado de la CUP señaló que el acuerdo “era un paso importante al que no se había llegado nunca”.

Es evidente que CiU necesita el aval de la izquierda, sobre todo de aquellos que tienen más autoridad en el movimiento obrero y entre la juventud, para hacer más creíble su maniobra y envolverla de un carácter histórico e ilusionante. Desde algunos sectores de la izquierda que se reclama “revolucionaria”, se plantea que la independencia de Catalunya es el golpe más importante al régimen nacido de la constitución de 1978, y que eso justifica ir de la mano de CiU para lograr la convocatoria del referéndum. Pero un análisis sobrio, y marxista, nos indicará que esto no es así, sino todo lo contrario.

En realidad, la imagen de Mas con los representantes de ERC, de ICV-EUiA y de la CUP tiene un paralelismo muy claro con la imagen de unidad que los dirigentes del PSOE y del PCE se prestaron a escenificar con los representantes de la derecha franquista, que habían llegado a la conclusión de que era necesario un lavado de cara del sistema para mantener el poder en manos de los de siempre —la oligarquía financiera, industrial y terrateniente— y descarrilar la revolución social que se estaba gestando. Por cierto, en aquel entonces, los representantes de CiU jugaron un papel muy activo para apuntalar una Transición por la que se acordó que todo el aparato represivo heredado de la dictadura quedara intacto. Y ahora, de la mano de estos mismos representantes de la oligarquía catalana resulta que vamos a asistir a una “ruptura histórica” con el régimen de la Transición. ¿De la mano de los mismos que se ensañan en la represión del movimiento obrero y estudiantil, que apoyan todas las medidas antidemocráticas y antisociales del PP, resulta que vamos a protagonizar un “conflicto democrático” con el Estado español? En los años 70, Felipe González y Carrillo justificaban los acuerdos con Suárez y Fraga como algo táctico, como el medio de “consolidar la democracia”. En 2013, los actuales dirigentes de IC-EUiA y de la CUP justifican los acuerdos con CiU también como algo “táctico”, como un pacto necesario “en la actual etapa” para “defender los derechos democráticos” del pueblo catalán, para lograr la independencia, y “luego veremos” qué carácter se le da al nuevo Estado, como si el hecho de la independencia, por sí misma, facilitase el cambio de la naturaleza de clase que pueda tener el Estado.

Es decir, que un Estado capitalista dirigido y gobernado por los mismos oligarcas de siempre, es un paso necesario y positivo... ¿al socialismo? ¿Acaso no nos suena esta música? Después de la etapa que hipotéticamente conduzca a una Catalunya capitalista independiente, la burguesía exigirá una nueva “etapa” para consolidar este Estado, en la que igualmente los trabajadores tendrán que posponer sus exigencias. Y así, de etapa en etapa, la burguesía seguirá indefinidamente en el poder. Los hechos han demostrado a qué camino condujeron las justificaciones etapistas en la lucha por la transformación de la sociedad: a la total adaptación al sistema, al desprestigio de las organizaciones de izquierdas y a incrementar el margen de maniobra de la burguesía frente a la clase obrera y la juventud. Lo que ocurrió en la transición española, en Portugal en 1974, en Irlanda del Norte, donde los dirigentes del Sinn Féin justificaron el pacto con los unionistas por estos mismos motivos, son ejemplos muy elocuentes.

Se argumenta a favor de este frente con la burguesía catalana que está circunscrito

a una cuestión democrática, como el derecho a decidir, pero que en la cuestión social y económica la oposición es total. Esta separación es completamente artificial. La situación real es que, primero, CiU no está apoyando el derecho a la autodeterminación sino su falsificación, su castración. De hecho, ella supedita su impulso del difuso “derecho a decidir” al apoyo concreto a su política antisocial. Segundo, ayuda a CiU a centrar el debate político en la cuestión nacional, en los términos que a la burguesía le interesa, en detrimento de la lucha de la clase obrera y de la juventud contra los recortes y su política represiva. Los diputados de IC o de la CUP pueden hablar de lucha contra los ricos, de la necesidad de enfrentarse a los recortes, pero si en la práctica sitúan como punto fundamental para cambiar la situación de angustia y sufrimiento que vive la mayoría de la sociedad la celebración de una consulta y la creación de un “Estado propio”, en realidad capitalista, y se defiende como táctica fundamental para llegar a la consulta un acuerdo con los representantes de la burguesía catalana, lógicamente la idea central que se transmite es la necesidad de priorizar este acuerdo y estos objetivos en detrimento de la lucha social, y también en detrimento del vínculo que existe entre la clase obrera y la juventud catalana con la del resto del Estado. Un vínculo necesario y fundamental en la movilización contra los recortes, por el derecho de autodeterminación y por el socialismo, que ha sido expresado en todos y cada uno de los grandes movimientos de protesta social de los últimos años: 15-M, huelga generales, PAH, movimiento estudiantil contra la LOMCE, etc., y que, por supuesto, la burguesía catalana está encantada en romper y enterrar.

La lucha por el derecho a la autodeterminación y el socialismo

La cuestión nacional siempre es un arma en constante disputa: por un lado la burguesía (española, catalana o vasca) trata de utilizarla como una herramienta para apuntalar su dominación contra los trabajadores y los oprimidos; por otro lado, la clase obrera tiene la posibilidad de hacer confluír todas las reivindicaciones y aspiraciones democráticas de las nacionalidades oprimidas en el torrente de la lucha contra el sistema capitalista, pero la condición para conseguirlo es que sus organizaciones políticas y sindicales adopten un programa y una estrategia revolucionaria, socialista e internacionalista, no solo en las palabras, sino sobre todo y fundamentalmente en los hechos.

Todos los trabajadores y jóvenes que defendemos una posición de clase e internacionalista en los sindicatos, en los movimientos sociales, en Izquierda Unida, debemos combatir los prejuicios del nacionalismo españolista. Debemos levantar la bandera de Marx y de Lenin: defender la unidad de la clase obrera por encima de las fronteras nacionales y los derechos democráticos nacionales de Catalunya, Euskal Herria y Galiza, incluido el derecho de autodeterminación, ligándolos a la lucha por el socialismo. La auténtica libertad de Catalunya, de Euskal Herria y de las naciones oprimidas sólo podrá alcanzarse con igualdad social, librando a la sociedad de todo tipo de opresión, comenzando por la opresión de clase y económica.

Nuestra alternativa es clara: una Federación Socialista de Catalunya, Euskal Herria, Galiza y del resto de los pueblos que componen la península Ibérica, en el marco de una República Socialista Federal que se vincule fraternalmente con una Federación Socialista Europea.

* Todos los textos sobre Catalunya publicados en EL MILITANTE: goo.gl/O44UkK.



Los clásicos del marxismo

El programa de transición, de León Trotsky

La tarea estratégica del próximo período (un período prerrevolucionario de agitación, propaganda y organización) consiste en superar la contradicción entre la madurez de las condiciones revolucionarias objetivas y la inmadurez del proletariado y su vanguardia (la confusión y desmoralización de la generación madura y la in-experiencia de los jóvenes). Es necesario ayudar a las masas a que en sus luchas cotidianas hallen el puente que una sus reivindicaciones actuales con el programa de la revolución socialista. Este puente debe componerse de un conjunto de 'reivindicaciones transitorias', basadas en las condiciones y en la conciencia actual de amplios sectores de la clase obrera para hacerlas desembocar en una única conclusión final: la toma del poder por el proletariado.

León Trotsky, *El programa de transición*

Miguel Ángel Domingo

Muchos textos clásicos del marxismo son considerados "fundamentales" (*El manifiesto comunista*, *El Estado y la revolución...*). Esta pequeña gran obra se ganó el derecho a entrar en esa categoría por lo que significó desde el punto de vista de la teoría y de la acción en el momento histórico en que fue elaborada.

León Trotsky escribió *El programa de transición* en 1938, como documento de la conferencia fundacional de la Cuarta Internacional que celebraron en París 26 delegados de 11 de las 29 secciones que existían. Hitler había alcanzado el poder en 1933 por la vía electoral, sin una resistencia seria al fascismo; en España y Francia la revolución había sido derrotada; todo esto se había producido sin que en el seno de la Internacional Comunista se alzara ninguna voz, ninguna crítica. De hecho, la Comintern se había convertido en una agencia en el exterior de los intereses de la burocracia soviética y el resultado concreto en estos países es que la política estalinista allanó el camino a las derrotas. Eran momentos de crisis económica internacional, paro masivo, revolución y contrarrevolución, momentos en que el capitalismo mostraba su decadencia a los ojos de las masas, sin una salida aparente, con el fascismo avanzando en Europa. En ese contexto, Trotsky lanza la idea de formar una nueva internacional como respuesta a lo que considera "el rasgo fundamental de la situación política mundial en su conjunto: la crisis histórica de la dirección proletaria". Las condiciones para la revolución estaban más que presentes, el factor ausente era una dirección adecuada, una dirección revolucionaria.

Un programa de lucha y una herramienta para construir el partido

El programa parte del hecho de que la política reformista de la socialdemocracia —su vieja división entre programa mínimo (reformas en el marco del capitalismo) y programa máximo (la lucha por el socialismo)— ya no podía ofrecer nada a las masas. En el terreno de las reformas, porque "toda reivindicación importante del proletariado, y hasta las exigencias de la pequeña burguesía, desbordan los límites de la propiedad capitalista y el Estado burgués"; en cuanto a la lucha por el socialismo, hacía décadas ya que había quedado simplemente para los discursos de las grandes ocasiones. Aunque con formas aparentemente distintas, el estalinismo seguía esta misma política.

Afirmando que la tarea de los revolucionarios no es reformar el capitalismo sino derribarlo, la esencia del programa de transición es que ofrece un conjunto de consignas que, a la vez que sirven para la lucha cotidiana de los trabajadores (contra el pa-

ro y la carestía de la vida, por la reducción de jornada o una escala móvil precios-salarios, por el control obrero...), ponen en evidencia que su consecución choca con las bases del capitalismo y que solo derribándolo se pueden asentar plena y definitivamente. "Si el capitalismo se muestra incapaz de satisfacer las exigencias que surgen de las calamidades que él mismo ha generado, debe desaparecer. La 'posibilidad' o 'imposibilidad' de materializarlas depende ahora de la relación de fuerzas y es una cuestión que sólo puede resolverse con la lucha. Sólo la lucha, con independencia de sus resultados concretos inmediatos, puede hacer que los trabajadores lleguen a comprender la necesidad de liquidar la esclavitud capitalista". Es una guía para la acción, para la intervención en la lucha de clases, y a través de ella para la construcción de las fuerzas de la Cuarta Internacional.

Lo impactante de este programa es que una buena parte de sus consignas se pueden aplicar a la situación actual sin cambiar una coma. En muchos sentidos, estamos viviendo una época parecida: están presentes la crisis económica, el paro masivo, la parálisis de la socialdemocracia y de las direcciones sindicales... Cualquier trabajador, joven, parado..., que lea este texto y esté buscando una vía para luchar contra este sistema encontrará una orientación para defender otro modelo sindical, para organizar la lucha contra el paro o una huelga más militante en su centro de trabajo, o para defenderse de las cada vez más presentes agresiones fascistas.

Lucha contra el sectarismo...

Este es un punto central del programa. "Los trabajadores, hoy más que nunca, necesitan organizaciones de masas, especialmente sindicatos, para luchar por las reivindicaciones parciales y transitorias". Trotsky contesta ideas sectarias que para algunos hoy día suenan muy actuales y novedosas, pero que como se puede ver son casi tan viejas como el movimiento obrero: "los sindicatos han perdido su utilidad" o "hay que construir nuevos sindicatos 'revolucionarios'". Caracteriza los sindicatos de una forma muy equilibrada: son una herramienta fundamental de lucha pero no pueden sustituir al partido; por su propia naturaleza agrupan a las capas más cualificadas y mejor pagadas y no a las más oprimidas; y precisamente por esto desarrollan también de manera natural tendencias al pacto con la patronal y el gobierno. Defiende el trabajo en ellos para ganar a las masas al programa de la revolución: "...seguir una política correcta respecto de los sindicatos. Quien no sepa buscar y hallar el camino hacia las masas no es un luchador, es un peso muerto que gravita sobre el partido". Y todo esto sin fetichismos ni falsas ilusiones: "Los sindicatos no son un fin en sí



mismo. Son medios para llegar a la revolución proletaria".

... y contra el oportunismo

Las tendencias oportunistas hoy en día también se asemejan a las de entonces: la política "responsable", "realista" o "del mal menor" de las direcciones reformistas, la absoluta falta de confianza en la capacidad de lucha de la clase obrera... En aquel momento era aún peor. No sólo los reformistas (socialdemócratas y reformistas) apuntaban más claramente el capitalismo sino que, tras las derrotas del proletariado en toda una serie de países, se producía el abandono de toda una serie de compañeros de viaje que renegaban abiertamente de la revolución y abogaban por "nuevas vías", algo tan viejo como los prejuicios sectarios.

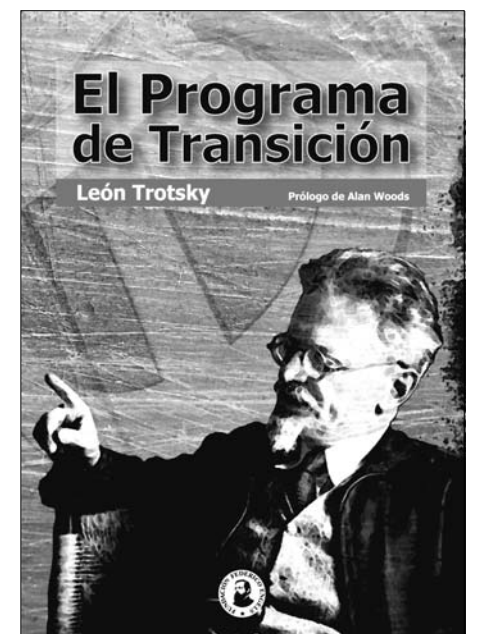
El programa de transición defiende el marxismo revolucionario como método para comprender la realidad y para elaborar una estrategia que pueda preparar la victoria frente al capitalismo. "No hay mayor grado de moralidad en una sociedad basada en la explotación que la revolución social. Son buenos todos los medios que aumentan la conciencia de clase de los trabajadores, su confianza en sus propias fuerzas y su disposición a sacrificarse en la lucha. Los únicos medios inaceptables son aquellos que inducen a los oprimidos a temer y a someterse a sus opresores, que aniquilan su voluntad de protesta y su capacidad de indignación y que sustituyen la voluntad de las masas por la de sus dirigentes, sus convicciones por la obediencia ciega y el análisis de la realidad por la demagogia y los amaños".

La vinculación de cada consigna al aumento de la conciencia política del proletariado, a confiar sólo en sus propias fuerzas y a la toma del poder, recorre todo el texto, ya sea al abordar las ocupaciones de fábrica —"Con independencia de las reivindicaciones de los huelguistas, la ocupación temporal de las fábricas es, en sí misma, un golpe al fetiche de la propiedad capitalista. Cada ocupación plantea en la práctica el problema de quién manda en la fábrica: el capitalista o los obreros"—, las expropiaciones —"3) Que llamamos a las masas a que no confíen más que en su fuerza revolucionaria. 4) Que ligamos la expropiación con la toma del poder por los obreros y campesinos"— o la lucha contra el fascismo —"Sólo por medio de este trabajo sistemático, permanente, infatigable y audaz de agitación y propaganda, apoyándose siempre en la experiencia propia de las masas, es posible erradicar de su conciencia las tradiciones de sumisión y de pasividad; entrenar destacamentos de luchadores heroicos ca-

paces de servir de ejemplo a todos los trabajadores; infligir una serie de derrotas tácticas a los pistoleros de la contrarrevolución; aumentar la confianza de los explotados en sus propias fuerzas; desacreditar al fascismo ante los ojos de la pequeña burguesía y allanar el camino del proletariado hacia la conquista del poder"—.

La juventud es la llama de la revolución proletaria

Cuando Trotsky habla de la inmadurez del proletariado, lo hace refiriéndose a la desmoralización de las capas más maduras y la inexperience de los jóvenes. A lo largo del texto presta atención a este punto en diferentes ocasiones, por ejemplo, al abordar el trabajo en los sindicatos o al proponer la formación de comités de fábrica. Siempre con una idea clara: la mayor flexibilidad organizativa y táctica para dar cabida a las capas más jóvenes, más inexpertas sí pero también más explotadas y sin la carga de experiencias negativas de la generación más madura. De una forma dialéctica brillante explica la relación entre ambas capas de la clase obrera: "Son los jóvenes, libres de responsabilidades por el pasado, quienes se encargan de regenerar al movimiento. La Cuarta Internacional dedica especial atención a la joven generación proletaria. Toda su política se dirige a hacer que los jóvenes confíen en sus propias fuerzas y en el futuro. Tan solo el fresco entusiasmo y el espíritu de ofensiva de la juventud pueden garantizar los primeros éxitos en el combate; y sólo esos éxitos pueden volver a atraer a los mejores elementos de la generación madura al camino de la revolución. Así ha sido siempre y así será".



La lucha contra la LOMCE continúa

El gobierno del PP prepara nuevos ataques a la educación pública

Ejecutiva Estatal del Sindicato de Estudiantes

Las luchas educativas que desde octubre de 2012 han puesto contra las cuerdas al gobierno del PP, y muy en particular al ministro de Educación, alcanzaron sin duda su máxima expresión el pasado 24 de octubre, cuando por segunda vez en la historia —y en menos de cinco meses—, se produjo una huelga general de todas las etapas educativas que sacó a las calles a más de dos millones de personas, con manifestaciones multitudinarias a lo largo y ancho de todo el Estado.

Esta enorme demostración de fuerza reivindica en sí misma la necesidad de continuar la movilización contra la LOMCE, ya que aunque fue aprobada el 28 de noviembre por una mayoría parlamentaria, tiene un rechazo social abrumadoramente mayoritario. De hecho, gracias a la movilización y la denuncia de su contenido reaccionario por parte del Sindicato de Estudiantes y la comunidad educativa en lucha, el gobierno ha sufrido una estrepitosa derrota política en su objetivo de convencer o siquiera neutralizar a la opinión pública. Las condiciones para continuar y derrotar la ley son muy claras.

En los últimos meses del año hemos sido testigos de cómo con las luchas contundentes, con un plan de movilización en ascenso y con la amplia participación de los trabajadores, sí se puede obligar a retroceder al Partido Popular en sus planes de recortes y contrarreformas. El ejemplo más claro a este respecto lo tuvimos con los trabajadores de jardinería y limpieza viaria de Madrid hace unos meses, cuando con 1.100 despidos puestos encima de la mesa plantaron cara con una movilización ejemplar al ayuntamiento de la ciudad y le



obligaron a retroceder completamente en sus ataques.

Por una huelga general educativa de 72 horas

Es por eso que, siguiendo este ejemplo, desde el Sindicato de Estudiantes continuamos defendiendo que la forma de echar atrás la LOMCE, frenar la inminente contrarreforma universitaria (que promoverá el cierre de facultades enteras, volverá a encarecer las matrículas universitarias y ahondará en la privatización de los órganos de gobierno universitarios), así como para evitar la degradación de las condiciones laborales del profesorado, que es la intención del PP con el anuncio de la elaboración del estatuto docente; es necesario seguir el camino de la lucha.

El ministro Wert ha ordenado la renovación completa de los libros de texto de 180 asignaturas para la aplicación de la LOMCE. Esto supondrá que ningún libro de años pasados servirá, garantizando un negocio multimillonario para las grandes editoriales que se harán de oro gracias a esta contrarreforma, mientras se anuncia una reducción

de prácticamente el 40% en las ayudas para libros de texto en 2014.

Por todo esto, una vez más volvemos a insistir a las direcciones de CCOO, UGT, STES y la CEAPA en la necesidad de convocar lo antes posible una huelga general educativa de 72 horas, para que profesores, madres, padres y estudiantes multipliquemos por tres el tremendo éxito de la histórica huelga general del pasado 24 de octubre; y así obliguemos de una vez por todas al Ministerio a dar marcha atrás en su intención de devolvernos a las cavernas educativas del franquismo.

Fortalecer al movimiento estudiantil y luchar contra la vuelta del franquismo

Simultáneamente a la defensa de una nueva huelga general de toda la comunidad educativa el Sindicato de Estudiantes ha lanzado un campaña de insumisión a la LOMCE, impulsando asambleas de estudiantes en todos los centros de estudio, con la participación de los profesores y padres.

También impulsaremos una extensa campaña de actos públicos en institutos y uni-

versidades públicas sobre la memoria histórica, el significado de la dictadura franquista y la importancia que este tema tiene en la situación actual. El pasado mes de noviembre nos unimos a la querrela argentina contra los crímenes del franquismo y sus responsables, que siguen totalmente impunes. En estos momentos, cuando todas las conquistas que la clase trabajadora arrancó a la dictadura franquista están en peligro —restricción de libertades públicas con la ley mordaza, restricción de derechos a las mujeres con el anteproyecto de ley del aborto, privatización y desmantelamiento de servicios públicos básicos como sanidad y educación, etc.—, se hace más necesario que nunca recordar quiénes son sus herederos y cómo hacerles frente. La lucha contra la derecha y contra el sistema capitalista es el mejor homenaje que los jóvenes y trabajadores podemos hacer a todos los luchadores que dieron su vida o que fueron represaliados por la dictadura, y gracias a los que durante décadas hemos disfrutado de una serie de derechos que ahora nos quieren volver a arrebatar.

Desde que comenzamos el curso, más de cuatro mil estudiantes se han afiliado al Sindicato de Estudiantes, y en estos momentos contamos con más de seiscientas asociaciones de jóvenes en todo el Estado. El gran paso adelante que hemos dado, organizando el movimiento estudiantil con un programa revolucionario, anticapitalista y de clase, es sólo el principio. Avanzar en la organización del movimiento es la mejor forma de prepararnos para hacer frente a los nuevos ataques que vienen por delante.

En www.sindicatodeestudiantes.net puedes seguir las diferentes campañas, descargar la propaganda y las resoluciones o consultar el calendario de actos que se vayan a realizar

El Militante • Ferrol

El jueves 9 de enero, en la Unión Comarcal de CCOO de Ferrol se celebró una asamblea, en régimen de autoconvocatoria, a la que asistieron unas 80 personas, un número importante (un delegado dijo que nunca había asistido a una reunión tan grande en la Unión Comarcal). La gran mayoría eran delegados, además de algunos exdelegados y de un grupo de militantes históricos del sindicato, entre ellos un ex secretario general de la Unión Comarcal. La actual secretaria general no asistió.

Lo que motivó la convocatoria fue la información de que se iba a apartar de la asesoría jurídica de la Unión de Ferrol a uno de sus dos abogados, un compañero de larga tradición que, además de ser abogado laboralista, es un trabajador de Navantia y militante de CCOO desde mucho antes de hacerse abogado. Aunque algún asistente tachó esto de rumor, allí quedó constatado que no era tal, sino que lo había dicho un miembro de la ejecutiva nacional de CCOO de Galicia. Por tanto, era normal darle credibilidad a la información, y más cuando la ejecutiva, puestos en contacto telefónico con ella, no la desmentía. (De hecho, no la desmintió hasta el miércoles por la tarde, en lo que la mayoría de los asistentes interpretó como una manio-

CCOO de Ferrol: las bases se rebelan contra los dirigentes del sindicato en Galicia

bra destinada a intentar evitar el éxito de la asamblea).

La convocatoria de esta asamblea no puede entenderse sin conocer el contexto de conflictividad entre los trabajadores gallegos del sindicato y la ejecutiva nacional de CCOO de Galicia, destacando dos cosas:

1) El despido de nueve trabajadores aplicando la reforma laboral del PP contra la que CCOO convocó la huelga general del 29 de marzo de 2012.

2) Las demandas en magistratura de varios abogados de CCOO de Galicia contra decisiones de la Ejecutiva Nacional. Ya hubo dos juicios (uno precisamente en Ferrol), y la Ejecutiva Nacional perdió ambos sin posibilidad de recurso.

En estos dos conflictos, el abogado de Ferrol se posicionó claramente en contra de las decisiones de la Ejecutiva Nacional, incluso fue testigo de su compañera abogada en el juicio de Ferrol, declarando en contra de la dirección del sindicato.

Más de 1.350 firmas contra los despidos en CCOO

Estas actuaciones de los dirigentes de CCOO de Galicia están encontrando una importan-

te respuesta en la base de CCOO de Ferrol. Por ejemplo, el día en que la Ejecutiva Nacional acudió a una reunión en Ferrol para explicar los nueve despidos, hubo una concentración de unos 25 delegados en el local de la Unión Comarcal, en protesta por la medida. Asimismo, se realizó una recogida de firmas en contra de los despidos, alcanzándose las 1.350. También el 9 de diciembre, fecha del juicio de la abogada de Ferrol, unos 50 delegados acudieron al juzgado para apoyarla.

Por tanto, en opinión de la inmensa mayoría de los asistentes a la asamblea, la idea de apartar al compañero abogado de la asesoría jurídica de Ferrol, injustificable e inexplicable desde el punto de vista profesional o económico, sólo podía entenderse como UNA REPRESALIA por la actitud mantenida por el compañero en esos conflictos internos.

La decisión de la asamblea fue dirigirse a la Ejecutiva Nacional para exigirle que desmienta oficialmente la información y que mantenga una actitud de diálogo ante las diferencias que existen o puedan existir con los trabajadores del sindicato, evitando toda actitud equiparable a las actitudes autoritarias que tantos delegados de

CCOO sufren cotidianamente a manos de sus empresarios.

Más allá del tema concreto, todo esto es una consecuencia de un modelo sindical que no está dando ninguna respuesta seria ante los gravísimos problemas que sufre la clase obrera de este país, que siguen agravándose a pesar de la propaganda gubernamental sobre “la luz al final del túnel”. El diálogo social en el que siguen insistiendo los dirigentes sindicales no sirve para absolutamente nada, excepto para envalentonar al PP y a la patronal.

Hace falta un sindicalismo combativo, de clase y democrático desde y para las bases, no desde y para unas cúpulas totalmente desconectadas de la realidad. De alguna manera, el movimiento sindical necesita un nuevo comienzo, y en Ferrol se evidenció que en la base de CCOO empieza a abrirse camino esta idea. Lo que pasó el 9 de enero en Ferrol es otro síntoma de que, más pronto que tarde, la escandalosa pasividad actual de los dirigentes sindicales va a ser superada por el empuje y la iniciativa de los trabajadores desde abajo, para dar la respuesta contundente que se merece todo lo que está pasando.

La movilización detiene la privatización del Monte en Cortes de la Frontera (Málaga)

Comité de Parados de Cortes de la Frontera

En estos tres años de legislatura, el alcalde (Partido Andalucista) y sus concejales han cometido demasiados atropellos contra nuestro pueblo y sus vecinos. El último ha sido su intento de privatizar totalmente el Monte, rompiendo de manera unilateral el convenio que el ayuntamiento tiene con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía sobre nuestros montes, encargo del mantenimiento y preservación del Parque Natural de los Alcornocales y Sierra de Grazalema.

Y pretendían hacerlo con nocturnidad y alevosía, como lo hicieron con la subida de sueldos del señor alcalde y sus concejales, convocando el pleno a las ocho de la mañana el 19 de diciembre, complicando así la asistencia de los vecinos, dándole una vez más la espalda a quienes se supone que representan.

Nada más tener conocimiento de este hecho, los compañeros del Comité de Parados nos pusimos manos a la obra para parar este ataque: repartimos cientos de hojas entre los vecinos exponiendo nuestra oposición tajante a estos planes, convocamos a asistir a dicho pleno y a una asamblea abierta de trabajadores para debatir y decidir las acciones a llevar a cabo si finalmente aprobaban este punto, e hicimos llegar esta información a la prensa provincial y comarcal. Fue tal la presión ejercida por la movilización de los compañeros del Comité en sólo dos días, que una vez en el pleno no se atrevieron a aprobar la ruptura del convenio, posponiéndolo para otro posterior.

Esto demuestra que sí se puede, que sí podemos parar los atropellos, de la misma manera que, fruto de las movilizaciones de todos los vecinos hace unos meses, conseguimos frenar su pretensión de triplicarse el sueldo.

¿Qué supondría la ruptura del convenio?

La trascendencia de la ruptura unilateral de este convenio es muy grande para nuestro pueblo, afectaría a nuestro patrimonio más importante: los montes de Cortes, que serían definitivamente privatizados para beneficio de los de siempre. Este acuerdo con la Junta de Andalucía, que defiende la titularidad y la conservación pública de los montes, es una conquista para los vecinos. El convenio supone:

1. La gestión de los montes la lleva la Junta de Andalucía, es decir, el trabajo técnico y legislativo lo lleva dicha administración sin coste económico para el ayuntamiento. Así, contamos en nuestros montes con servicios públicos y gratuitos para las arcas municipales como son: cortafuegos, servicios de retenes, proyectos de trabajos forestales, arreglo de carriles, de vías de saca, de fuentes...

2. El aprovechamiento de dichos montes es de competencia municipal, es decir, el ayuntamiento tiene la libertad de decidir cómo se gestionan los trabajos.

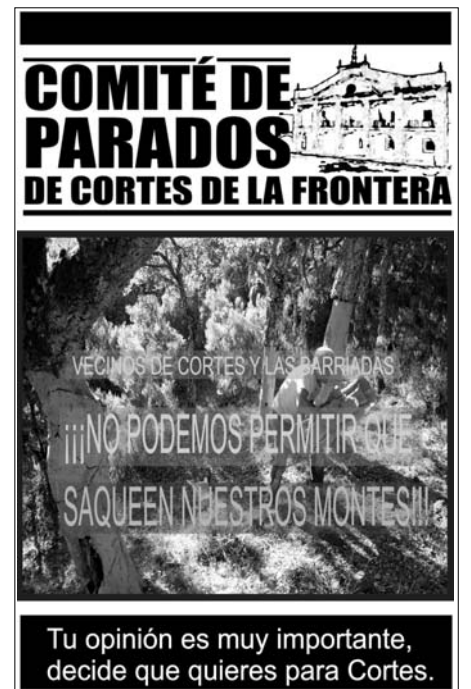
Precisamente este último aspecto, que en teoría permitiría a todos los vecinos obtener beneficios de la explotación municipal de los montes, es el que hay que lograr que se cumpla correctamente. Desde el Comité siempre hemos defendido que el aprovechamiento y la explotación de los Mon-

tes debe ser pública, evitando así que unos cuantos empresarios, pagando jornales miserables a los corcheros, se lleven el beneficio que generan nuestros montes, en lugar de que reviertan en las arcas municipales y, además, favoreciendo el que todos los trabajadores interesados puedan acceder a dichos empleos.

Por la remunicipalización de la saca del corcho

Si el alcalde y sus concejales hubiesen llevado a término sus pretensiones, **nuestros montes se convertirían a todos los efectos en una entidad privada**, en manos del alcalde de turno y el ayuntamiento tendría que gestionar todo de manera unilateral, es decir, se tendrían que encargar de hacer proyectos, buscar subvenciones, realizar trabajos de cortafuegos, dar el servicio que vienen dando los retenes. Además, todo el capital económico necesario para esto deberá salir del fondo de mejora --que por cierto, no se paga desde hace años-- y del presupuesto del ayuntamiento. En definitiva, ya sabemos lo que esta medida significaría: un negocio fabuloso para unos cuantos empresarios bien conectados con la corporación municipal, contratos sin derechos, bajos salarios y, sobre todo, esquilmar nuestro patrimonio colectivo más importante, los Montes.

Esta corporación, que pretende privatizar nuestros recursos naturales, es la misma que a día de hoy mantiene cerradas todas las infraestructuras municipales, como el hotel, el parador, el camping, la zona recreativa de La Saucedá; los mismos que siguen haciendo del clientelismo en el reparto del trabajo su bandera, que todavía no han ex-



plicado en qué condiciones se produjo la venta del corcho de la campaña pasada; los mismos que todavía no han presentado los presupuestos municipales, que continuamente tienen pagos atrasados de las nóminas municipales, y que de manera autoritaria suspendieron de empleo y sueldo a un funcionario municipal; los mismos que ejercen la represión contra aquellos que levantan la voz contra sus atropellos, como en el caso del Comité de Parados con su intención de desalojarnos de nuestro local...

Hemos conseguido una primera victoria. Pero debemos estar atentos por si este ataque se intenta materializar más adelante, para volver a pararlo porque **los montes son nuestro presente pero también nuestro futuro**. ¡Si quieren crear empleo, que pongan en marcha todas las infraestructuras públicas cerradas, que se remunicipalice la saca del corcho y del resto de aprovechamientos de nuestros montes, que dejen de regalar el dinero de todos a una minoría de empresarios!

Intensa actividad del Comité de Parados de Guadalajara

Felipe Palacios y José M^a Gil Comité de Parados de Guadalajara

A principios de octubre de 2013 un grupo de desempleados de Guadalajara tuvimos la iniciativa de crear un Comité de Parados para denunciar el completo abandono que sufre este colectivo de la ciudad, más de 8.000. La destrucción masiva de empleos en la construcción y el cierre de multitud de empresas ha multiplicado por cuatro la cifra de parados desde 2007 en la provincia, afectando mucho a la capital y pueblos cercanos ya que es aquí donde se concentra el 80% de la población de la provincia. Un reciente informe de CCOO dice que 9.666 parados en la provincia no reciben ningún tipo de prestación o subsidio.

Desde el Comité de Parados teníamos claras varias cuestiones antes de empezar este trabajo. Solo una movilización masiva de los parados y trabajadores de la ciudad conseguirá arrancar alguna concesión de las instituciones, gobernadas por el PP en Ayuntamiento, Diputación y Gobierno regional. Que nuestras reivindicaciones pasaban por exigir trabajo y en su defecto subsidios dignos, situando en 1.100 euros la cantidad mínima con la que se puede vivir dignamente. Esto provocó un debate interesante sobre si no sería mejor reivindicar una cifra menor, pero se solventó sin dificultad, ¿acaso con 426 euros que paga el Estado a algunos de los que han agota-



do todas sus prestaciones se puede hacer algo más que sobrevivir? Los parados no queremos limosnas queremos trabajar y si los capitalistas y el gobierno no son capaces de ofrecerlo tendrán que procurarnos un subsidio digno. Tampoco queremos separarnos de los trabajadores en activo y de sus organizaciones sindicales y políticas, por lo que nos dirigimos a ellos para que colaborasen en todo lo que hiciéramos.

Más de 4.600 firmas exigiendo empleo digno

La primera reivindicación de cara al Ayuntamiento, aprovechando que los presupuestos de la ciudad iniciaban su discusión, ha sido la creación de planes de empleo municipales. Empezamos una campaña de recogida de firmas, editamos mil hojas explicando qué es el Comité, cuáles son nuestras reivindicaciones y una convocatoria

para una concentración frente al Ayuntamiento. Nos presentamos en la oficina del Sepecam (antiguo Inem) durante varios días, llevamos nuestra pancarta, nuestra hucha y nuestra mesa para recoger firmas. La respuesta fue increíble. El día de la concentración agrupamos a unas 50 personas teniendo gran repercusión en los medios de comunicación locales, pero lo más importante es que 12 parados se apuntaron al Comité y la incorporación de estas nuevas fuerzas se notó rápidamente. Decidimos la convocatoria de una nueva concentración a finales de noviembre y participar en cualquier movilización que se organizase en la ciudad, sin abandonar el reparto de hojas en la oficina del paro; participamos en la movilización del Sindicato de Estudiantes del 22, 23 y 24 de octubre dando un saludo al final de su manifestación; participamos en una manifestación contra el fracking en la provincia; estuvimos con los

trabajadores de Tudor en Azuqueca de Henares que estaban en huelga; en la nueva huelga del Sindicato de Estudiantes del 20 de noviembre y en la manifestación sindical del 23; acompañamos a los trabajadores del centro de atención de minusválidos físicos de Guadalajara, los únicos que se siguen concentrando todos los viernes desde julio de 2012 contra la supresión de su paga extraordinaria y la rebaja del 15% de su salario.

También participamos en la presentación de la empresa Inditex, que va a crear 500 empleos en una localidad cercana. Allí se presentaron más de 4.000 personas desesperadas por encontrar un empleo, repartimos más de 1.000 hojas que eran todas las que llevábamos. En la siguiente concentración volvimos a ser unos 50 y se incorporaron al Comité otros dos compañeros. Nos dirigieron un saludo IU y CCOO.

Finalmente, a finales de diciembre entregamos más de 4.600 firmas en el ayuntamiento exigiendo planes de empleo, e incluso nos presentamos con pancartas en el pleno el día que se discutieron los presupuestos. Pero no hemos obtenido ninguna respuesta por parte del alcalde que ha despreciado nuestras propuestas. En las próximas semanas vamos a reunirnos con los sindicatos, partidos de izquierda y los movimientos sociales para conseguir una movilización masiva que consiga arrancar alguna concesión a este ayuntamiento cuyas únicas medidas para luchar contra el desempleo consisten en subvencionar a los empresarios.

El 18 de diciembre la plantilla de esta empresa filial de Ayesa AT dedicada a la gestión informática consiguió una primera victoria. Después de 15 días de huelga, que a partir del 10 de diciembre fue indefinida, se ha paralizado de forma cautelar el traslado de la mitad de la plantilla a Sevilla hasta el 8 de enero y fijado juicio para el día 16 de ese mismo mes.

EL MILITANTE.— Manteneis que los traslados a Sevilla son el primer paso para cerrar la filial de Cádiz, ¿cuáles son las verdaderas intenciones de la empresa?

Respuesta.— SDS se asentó en Cádiz beneficiándose de las cuantiosas subvenciones que surgieron después del cierre de Delphi. Según nos consta, más de 600.000 euros de ayudas se destinaron a crear empleo estable. Sin embargo, una vez que las subvenciones se agotaron, la empresa pretende imponernos condiciones imposibles para que los trabajadores nos veamos forzados a rescindir contrato, es decir, un ERE encubierto bajo la forma de un traslado colectivo. Esto es algo que los trabajadores de la provincia de Cádiz lamentablemente tenemos bien aprendido, no es la primera vez que pasa que una empresa llega, se lucra con nuestro trabajo y las ayudas públicas, y acaba cerrando para aumentar su cuenta de beneficios. Por eso, decidimos hacer una defensa firme de nuestros puestos de trabajo desde el primer momento, comenzando por una huelga de 48 horas hasta llegar a la huelga indefinida, pasando por una huelga conjunta con los trabajadores de Ayesa AT, nuestra empresa matriz, en Sevilla.

EM.— Desde el primer momento habéis defendido que la clave de una posible victoria es sacar la lucha fuera de la fábrica, ¿cómo lo habéis puesto en práctica?

R.— Nuestro caso no es diferente a la situación en la que viven muchos trabajadores en todo el estado. Sabemos, además, que las leyes están hechas al dictado de los empresarios. Era fundamental que no nos quedáramos aislados, necesitábamos extender nuestra lucha, explicársela a los trabajadores de otras empresas y llevarla a las ciudades de nuestro entorno. No solo estamos defendiendo nuestros propios empleos, estamos luchando contra la desindustrialización de la Bahía, tratando de impedir que otra empresa desaparezca en Cádiz. En este sentido, hemos estado realizando colectas para la caja de resistencia, hemos repartido miles de panfletos explicando nuestro conflicto en distintas ciudades de la provincia y, finalmente, el día antes de la vista previa, convocamos una manifestación que fue apoyada por todas las organizaciones de la izquierda. Nuestro lema era “Por el empleo en la Bahía de Cádiz, contra el ERE encubierto en nuestra factoría”. Invitamos a participar en la cabecera a los familiares de los trabajadores que sufrían prisión preventiva por el “delito” de reivindicar carga

La lucha continúa

Paralizados cautelarmente los traslados en SDS (Cádiz)

Entrevista a Antonio Dionisio, Carlos Armengol y Paco Fornell, presidente, vicepresidente y delegado sindical de CCOO de SDS



de trabajo para Navantia. También invitamos al colectivo de parados del Metal, logrando finalmente una impresionante manifestación de alrededor de 4.000 personas.

EM.— Exigís la implicación de la Junta de Andalucía, ¿por qué?

R.— Actualmente, la Junta de Andalucía es dueña del 22% de las acciones de nuestra empresa matriz, antes Sadiel y ahora Ayesa AT. Hasta 2011, el gobierno autonómico poseía el 36,5%, lo que pasa es que vendió a precio de saldo buena parte de sus acciones a Ayesa, propiedad de un empresario de la órbita del PSOE. Esta venta se produjo en contra de la opinión de los trabajadores de ambas plantillas, Sadiel y SDS, que exigíamos que no se regalase una empresa que generaba beneficios. Es más, advertimos que si Ayesa llegaba a controlar la empresa, se producirían toda clase de recortes, como ha ocurrido. La venta finalmente se produjo sin garantías de empleo y sin que los políticos implicados siquiera se dignasen a sentarse y escuchar a los trabajadores. Dos años después, con varios cientos de despidos en el grupo, 30 de ellos en Cádiz, nos encontramos con este ERE encubierto. Reclamamos a la Junta, al PSOE y, especialmente a IU, que se impliquen con el empleo y se posicionen clara y firmemente con los trabajadores. Los trabajadores y jóvenes que con sus votos han permitido constituir este gobierno en la Junta, quieren que se pongan en marcha todas las acciones que sean necesarias para que no se destruya

mas empleo. En este caso es especialmente fácil, puesto que son dueños de parte de la empresa. Hasta ahora solo hemos encontrado bonitas palabras que no se han concretado en acciones significativas. Pero, lo tenemos claro: igual que la Junta ya ha expropiado temporalmente algunas viviendas a los bancos es necesario que defiendan, pero con más contundencia, el resto de derechos de los trabajadores. Las empresas amenazadas por el cierre, que pretendan hacer un ERE o que planteen rebajas en las condiciones a sus trabajadores, deben ser expropiadas y nacionalizadas para ponerlas bajo control de los trabajadores.

EM.— Respecto a la victoria parcial obtenida en los tribunales, ¿la clave ha estado dentro del juzgado o en la calle? ¿Cuáles son los siguientes pasos en la lucha?

R.— A los trabajadores nadie nos regala nada. Todo lo que conseguimos lo hacemos por medio de la unidad, el esfuerzo y la lucha. Las empresas lo tienen muy fácil con el marco laboral actual. Los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP, con sus reformas laborales, han servido los derechos de los trabajadores en bandeja de plata a los empresarios. Por eso, es imposible arrancar ningún avance, hacer una defensa real del empleo, sin una lucha decidida y sin la extensión del conflicto. Debemos ejercer presión en todos los flancos que podemos, en la administración, en la empresa, pero todas estas acciones tienen que estar supeditadas a la de la lucha en la calle, que es desde donde realmente siempre la clase trabajadora ha arrancado todos y cada uno de sus derechos. Gracias a la lucha ha surgido esta victoria, la suspensión cautelar de los traslados, cosa que parecía imposible antes de que nos pusiésemos en marcha. Pero no termina aquí. El plan de traslado sigue sobre la mesa y, por tanto, la lucha debe seguir hasta el último minuto. De cara al juicio que se celebrará el día 16 de enero tenemos que situar la lucha en el punto álgido en el que estaba antes del parón navideño. La lucha, cuando es decidida y contundente, da sus frutos. Tal es el caso de la limpieza o el alumbrado de Madrid, de los estudiantes contra la LOMCE y, también, en el sector de la informática, como las luchas de HP o Capgemini, por citar solo unas cuantas. Nosotros tras conocer la paralización cautelar de los traslados, decidimos en la asamblea de trabajadores retomar la huelga

“No solo estamos defendiendo nuestros empleos, luchamos contra la desindustrialización de la Bahía”.

indefinida a partir del 13 de enero y organizar una nueva manifestación el 15, el día antes del juicio.

EM.— Conocemos también vuestro rechazo a la política de paz social practicada por la dirección de CCOO y la exigencia de la convocatoria de una huelga general en toda la Bahía. Dicha posición y la determinación con la que la estáis poniendo en práctica no surge del aire, ya que formáis parte de la Corriente Marxista EL MILITANTE.

R.— Desde la sección sindical de CCOO en SDS siempre hemos defendido que los derechos hay que defenderlos con uñas y dientes en las calles. La política del llamado mal menor que desgraciadamente los dirigentes de nuestro sindicato llevan adelante solo favorece a los grandes empresarios y banqueros de este país. Paralelamente, la clase trabajadora está demostrando una y otra vez que está dispuesta a luchar por sus derechos, lo vemos con la LOMCE, con la Marea Negra, con la Marea Verde, con la Marea Blanca, con los trabajadores de limpieza vial en Madrid, los trabajadores de Panrico... Nadie puede decir que los trabajadores no estamos dispuestos a luchar. Por eso, es inadmisibles la posición de los dirigentes de nuestros sindicatos de negarse en rotundo a unificar todas las luchas que se están dando.

La aceptación de la lógica y los límites del capitalismo por parte de las direcciones de UGT y CCOO ya ha demostrado lo lejos que los puede llevar. Han firmado miles y miles de despidos en la banca, en Iberia, en la función pública, etc. Incluso han aceptado la prolongación de la edad de jubilación. Además, debido a esta política, nuestros sindicatos lejos de ganar autoridad y fortalecerse cuentan con la crítica merecida de sectores cada vez más amplios del movimiento obrero. Por nuestra parte, siempre hemos defendido que CCOO y UGT no son patrimonio de su cúpula dirigente, sino de todos los trabajadores que durante años los construimos. En este sentido pensamos que es vital organizar un fuerte movimiento por abajo para recuperar esta herramienta de lucha. Pero esto solo puede hacerse a través de un programa que suponga una alternativa al sistema capitalista. Por ello, formamos parte de la Corriente Marxista Revolucionaria EL MILITANTE, porque nos dota de las ideas y los métodos genuinamente anticapitalistas y revolucionarios, imprescindibles para llevar hasta el final la defensa de los derechos de la clase trabajadora.



Huelga del Metal en Barcelona el 22 de enero

Hay que ampliarla a toda Catalunya con un plan de lucha contundente

Manu Vidal y Xosé L. Puime
Afiliados de CGT y CCOO, respectivamente

Tras la desconvocatoria de la huelga del Metal en Catalunya del 23 de mayo, las direcciones de CCOO y UGT acordaron con la patronal en Tarragona y Girona ratificar la prórroga de la vigencia de los convenios provinciales actuales hasta finales de 2015 y el abono de los atrasos en cuatro años (en Tarragona 0,4 en 2013 y 0,76 los siguientes) y una actualización del salario del 0,6%. El acuerdo recoge que los salarios se actualizarán a finales de 2013 tomando como referencia el IPC de toda la zona euro, no el del Estado español. Asimismo, a la hora de fijar la actualización salarial se descontará del cálculo del IPC la subida anual del petróleo si es superior a un 10%. Otro punto es que en los años 2014 y 2015 los salarios no se actualizarán en función de la subida de la vida, sino del PIB del país. Este acuerdo ha sido presentado como un gran logro, pero en nuestra opinión no es tan positivo, ya que asume que los trabajadores perdamos poder adquisitivo y no garantiza en la práctica nada (ya que según el acuerdo estatal de convenios cualquiera de las partes puede levantarse en cualquier momento, dejar sin efecto el convenio e instar al arbitraje), ni siquiera el pago de las tablas salariales.

De hecho, tal y como recogía el *Diari de Girona* el pasado 2 de abril, los empresarios del Metal en el Gironés llevaban —hasta la fecha— dos años sin aplicar los incrementos salariales del convenio. Por tanto, **este acuerdo no es ninguna concesión a los trabajadores. Todo lo contrario.** Como decía la Plataforma de Trabajadores del Metal de la Petroquímica de Tarragona (formada por militantes de CCOO, CGT, UGT y trabajadores sin afiliación sindical) en un momento como el actual, de recorte tras recorte, en el que están quitándonos todos nuestros derechos, la patronal y el PP no iban a ceder nada sin una lucha fuerte como lo demuestra la aprobación de la reforma laboral o todos los retrocesos del día a día. Asimismo la firma de los acuerdos en las dos provincias ha restado fuerza a la lucha conjunta de todo el sector del Metal de Catalunya y del conjunto de trabajadores, ante unos ataques que son comunes.

Los acuerdos firmados en Tarragona y Girona no se han trasladado a las provincias de Barcelona y Lleida, donde la patronal sigue mareando la perdiz y se niega a recoger sobre el papel la más mínima actualización salarial y plantea incluso una bajada salarial los próximos dos años. Ante esta situación CCOO y UGT han realizado algunas concentraciones y anuncian la convocatoria de huelga en el Metal de Barcelona el 22 de enero. Es fundamental que esta huelga tenga el máximo apoyo, continúe hacia adelante y se extienda a toda Catalunya y a todo el estado. Ante unos ataques tan contundentes a nuestros derechos, pensamos que la única manera de defenderlos consecuentemente es con un plan de movilización igual de contundente, con huelgas generales ascendentes y extensión de la lucha a otros sectores. Para ello llamamos a las direcciones de CCOO y UGT a rectificar su política de pactos, a impulsar la movilización con todas sus fuerzas y a convocar asambleas en los tajos para organizar la lucha en condiciones y decidir sobre la misma.

• **Por un convenio digno y su cumplimiento en todas las empresas.**

• **Aumento salarial según el aumento real de la vida.**

• **Reducción de jornada y aumento de la contratación para reducir los brutales ritmos de trabajo y la inseguridad laboral.**

• **Ningún despido.**



Pedro Abellán
Portavoz de la Asamblea de
Parados/as de Vitoria-Gasteiz

Los trabajadores de Laminaciones Arregui, ahora Celsa Atlantic, llevan dos años luchando por un futuro digno que garantice el empleo. Después de amenazas de despidos y recortes, la dirección de la empresa impuso un ERE de extinción para toda la plantilla por no aceptar sus chantajes. Despidió a 178 trabajadores, incluyendo a cuatro miembros del comité de empresa, impuso otro ERE de suspensión posteriormente, se negó a aceptar numerosas sentencias contrarias, y tampoco acepta negociar con el comité. Desde entonces, los trabajadores se han manifestado todos los jueves por las calles de Vitoria-Gasteiz con una camiseta naranja que recuerda los 178 despedidos y un letrero contra la reforma laboral.

A principios de noviembre de 2013 salió la sentencia del Tribunal Supremo en la que, con dos votos particulares que suman 6 de los 13 magistrados que componen la Sala, se considera que el despido colectivo en su conjunto es nulo por vulneración del derecho fundamental de huelga. Sin embargo, solo se revoca parcialmente la anulación de los despidos. Hay que recordar que el primer expediente de regulación afectaba solo a 91 trabajadores. La empresa decidió posteriormente echar a 178 operarios de las plantas de Vitoria y Urbina en represalia por la huelga. Esto ocurrió entre los meses de marzo y junio de 2012, sin variaciones significativas de la situación económica y productiva de la empresa.

La sentencia del Tribunal Supremo representó un triunfo parcial para los

La lucha continúa en Laminaciones Arregui

trabajadores ya que consideraba que la empresa al incrementar los despidos “realizó un acto de extorsión contrario al ejercicio del derecho de huelga” y declarando nulos los nuevos despidos. Sin embargo, el Tribunal consideró que no era ese el caso de los 91 iniciales. Con esta baza en su mano, la empresa ha ido mandando nuevas cartas de despido decidiendo de los 178 quienes son esos 91, ya que no había listas de unos o de otros en ningún momento, intentando dividir y quebrar una vez más la voluntad de lucha de la plantilla.

Conscientes de que su lucha es la de toda la clase trabajadora han aglutinado en sus manifestaciones a las diferentes empresas en conflicto. De la iniciativa de los trabajadores de Laminaciones Arregui surgió la plataforma Araba Borrokan, cuya última movilización fue el pasado 19 de diciembre, y que aglutina a 60 comités de empresa, 100 secciones sindicales, todos los sindicatos (salvo ELA, cuya dirección no quiso implicarse) y decenas de colectivos sociales.

El 9 de enero los trabajadores de Laminaciones han vuelto a manifestarse con el apoyo de todas las centrales sindicales salvo UGT, con mayoría en el comité de empresa y que a mitad del camino, cediendo a las presiones y chantajes de la empresa, abandonó la lucha y llamó a sus afiliados a trabajar. En el momento de escribirse este artículo el conflicto continúa, la empresa se niega a negociar con el Comité una solución y las plantas de Vitoria y Ur-

bina están cerradas temporalmente. Por su parte, la moral de la plantilla sigue siendo muy alta, en las dos últimas movilizaciones se ha visto fortalecida por el apoyo de las organizaciones sindicales y de numerosos jóvenes y activistas que hemos acompañado a los trabajadores de Laminaciones.

En dos años, el nivel de sacrificio de estos trabajadores ha sido tremendo; acudiendo a las 5 de la mañana, verano o invierno, a la puerta de la fábrica, acompañados en ocasiones por activistas de otras empresas —como Celedonio, de profesión bombero y afiliado a la UGT, que estuvo meses en lucha junto con sus compañeros del Aeropuerto de Foronda—, de la asamblea de parados/as y del Sindicato de Estudiantes, al que los trabajadores de Laminaciones rindieron un homenaje.

Como explicaba Nando, presidente del Comité de Empresa por el sindicato ELA, a un vendedor de EL MILITANTE en su última manifestación: “Los trabajadores en lucha nos sentimos orgullosos y protagonistas de la lucha que estamos llevando a cabo. Hemos establecido entre nosotros fuertes lazos de amistad y compañerismo por estar compartiendo esta experiencia de lucha. Cada cual ha sacado lo mejor de sí mismo para continuar adelante con el resto de sus compañeros y eso no se puede olvidar jamás”.

Con esta moral y ánimo, Nando no tiene ninguna duda de que los trabajadores lograremos echar abajo la reforma laboral y conseguir una sociedad más justa para todos.

Los trabajadores de Tenneco ocupan las instalaciones

Mónica Iglesias

En diciembre, prácticamente la totalidad de la plantilla de la empresa de amortiguadores recibía la carta de despido. La empresa daba así un paso más en su proyecto de deslocalizar la factoría, ofreciendo a los trabajadores una indemnización de 20 días por año, con un máximo de 18 mensualidades. En lo que no puede interpretarse más que como una provocación, ofertaba unos pocos traslados laborales, a Rusia y Polonia, sin mantener categoría ni condiciones salariales.

Ante esto, los trabajadores han ocupado las instalaciones para impedir que la dirección de la empresa las

desmantele, llevándose la maquinaria. La ocupación se ha organizado por turnos, para garantizar la presencia de trabajadores en todo momento. Así han despedido el año un numeroso grupo de los mismos, arropados por familiares y por la solidaridad de los vecinos, algunos de los cuales ya se han ofrecido a participar en el encierro si fuera necesario.

Ahora, los trabajadores recurrirán sus despidos con el objetivo de conseguir la anulación del ERE. Sin duda, la mejor manera para lograrlo será la unidad de la plantilla y la solidaridad del resto de los trabajadores para sacar la lucha a la calle de manera masiva y seguir defendiendo: ¡Tenneco no se

cierra! Para ello, además de mantener la ocupación, los trabajadores han dado un paso importante, impulsando la unificación de la lucha con otros conflictos abiertos, como el de Duro Felguera, donde peligran más de 100 empleos, los trabajadores de LIBERBANK, afectados por un ERE y otras empresas amenazadas de cierre como Benito Sistemas.

Los dirigentes sindicales de CCOO, CSI y UGT deben impulsar decididamente estos procesos, incorporando a más sectores a la lucha, como la minería, y elaborando un plan de movilizaciones ascendente que incluya la huelga general en Asturias contra la destrucción de empleo.

El pasado 27 de junio Europastry SA echaba de la empresa a la delegada de la sección sindical de CCOO en Europastry Oficinas, Ivonne García, a través de un despido disciplinario, alegando un error cometido en la facturación. La realidad es que Ivonne llevaba varios meses desarrollando una intensa actividad sindical. Tras una amplia campaña de solidaridad contra este atropello a los derechos de los trabajadores, el juicio se celebró el 2 de diciembre. La sentencia declara nulo el despido por vulneración del derecho a la libertad sindical, obligando a la empresa a su readmisión y a pagarle una indemnización de 6.000 euros.

A continuación publicamos la entrevista realizada a Ivonne García poco después de conocerse la sentencia.

EL MILITANTE.—¿Cuáles fueron las causas que alegó Europastry para despedirte?

Ivonne García.— La empresa me despedía alegando un error cometido en la facturación, según ellos, había abusado de la buena fe contractual con el objetivo de perjudicar la imagen de Europastry. La realidad es que yo llevaba varios meses desarrollando una intensa actividad sindical, en defensa del convenio colectivo de masas congeladas, que Europastry se negaba a negociar, y en defensa de los derechos laborales de mis compañeras de trabajo. Desde noviembre de 2012 intervine en asambleas, piquetes, huelgas generales, y había hecho reparos informativos en las plantas de fábrica de Europastry con el fin de informar de la situación del convenio, y solidarizándome con los despidos producidos en una de las fábricas que la empresa tiene en Sarral (Tarragona). Paralelamente a esta actividad, estaba promoviendo la candidatura de CCOO para las próximas elecciones sindicales, que finalmente se celebraron el pasado mes de septiembre, candidatura que no pudo completarse debido al miedo que causó mi despido.

EM.—¿Recibiste apoyo por parte de tus compañeros a raíz de tu despido?

IG.— Desde la sección sindical de CCOO Oficinas y con la ayuda de la Corriente Marxista EL MILITANTE, donde milito desde hace tres años, iniciamos una intensa campaña de denuncia. Durante meses se fueron recogiendo firmas —hasta sobrepasar con creces las 500— de sindicalistas de CCOO, CGT, UGT, STEs, (secretarios generales, delegados, afiliados...), asociaciones de profesores, activistas de la PAH, del Sindicato de Estudiantes, asociaciones de padres (FAPAES, FAPAC), de diferentes grupos políticos como EUiA, CUP, ICV, de la Fundación Federico Engels, de sindicalistas y delegados de empresas como EMTE, IBM Madrid, Navantia, SDS, Arcelor-Mittal, Clece, Correos, H&M, Pizza Móvil, Telefónica Móviles, Still, Schneider..., de comités de empresa de los ayuntamientos de Sabadell, Terrassa, Rubí, Asturias, Málaga, Azuqueca de Henares, Parla..., de las asambleas de parados de Cortes de la Frontera, de Vitoria-Gazteiz, de Guadalajara...

Este apoyo conseguido ha tenido un reflejo en la propia sentencia, que recoge que “la sección sindical de CCOO en Europastry Oficinas ha abierto la dirección electrónica de apoyo europastryrepresio.blogspot.com.es, donde aparecen 502 nombres de ciudadanos que se solidarizan con la demandante tras su despido”. Una vez más se demuestra que la solidaridad entre la clase obrera es clave a la hora de emprender cualquier lucha sindical o de enfrentarse, como en este caso, a un ataque de la patronal. Sin duda alguna, el apoyo de todos estos sindicalistas, trabajadores, estudiantes y activistas ha jugado un papel esencial a la hora de conseguir esta tremenda victoria, demostrando la enorme fuerza de los trabajadores cuando estamos organizados y dis-

¡La lucha sirve, la lucha sigue! ¡Sí se puede!

Declarado nulo el despido de Ivonne García por vulneración de la libertad sindical

Entrevista a Ivonne García, delegada por CCOO en Europastry Oficinas SA



“Esta sentencia vuelve a demostrar que la lucha es el único camino (...) la clave para esta y futuras victorias es la organización, contundencia en la lucha y solidaridad del movimiento obrero en su conjunto”

puestos a llegar hasta el final en defensa de nuestros derechos y de los intereses de la clase obrera.

EM.—¿Cómo se desarrolló el juicio?

IG.— El juicio tuvo lugar el 2 de diciembre en los juzgados de Terrassa, después de haber sido pospuesta su celebración el 25 de octubre debido a la huelga indefinida que, dos días antes, habían convocado los trabajadores de justicia del mencionado juzgado. Tanto en aquella ocasión, como el día de la celebración del juicio, la sección sindical de CCOO Europastry Oficinas convocó concentraciones de apoyo en la puerta de los juzgados. Estas acciones contaron con el apoyo de la Federación Agroalimentaria de CCOO de Catalunya, y fueron respaldadas por la intensa campaña de solidaridad iniciada a partir del día de mi despido por la Corriente Marxista EL MILITANTE. Las concentraciones fueron todo un éxito, contando con la participación de unos 25 compañeros en cada una, coreando consignas exigiendo mi readmisión. Entre ellos, compañeros de CCOO, CGT Neteja Girona, Sindicat d'Estudiants, EUiA Terrassa y Rubí y de EL MILITANTE.

En el juicio acudieron a declarar por parte de la empresa el representante legal de la misma, mi superior jerárquico y, lamentablemente, la presidenta del Comité de Empresa por FITAG-UGT. La abogada de Europastry demostró un profundo odio de clase, al sugerir que yo, al haber creado una caja de resistencia para poder cubrir los gastos de abogado así como los propios de la campaña de solidaridad realizada, tenía como intención “enriquecerme”. Pero más grave fue la conclusión de que “la demandante utiliza el sindicalismo para protegerse a sí misma”. Por otro lado, mi superior jerárquico reconoció que la decisión de despedirme se tomó un día antes de la comisión del “grave error” utilizado como excusa para justificar el despido.

Pero lo realmente preocupante y lamentable fue la declaración de la presidenta del Comité a favor de Europastry, justificando el despido y la persecución sindical, demostrando qué tipo de “sindicalismo” permite y consiente la empresa. No es casualidad que el propio juez cite en la sentencia, como ejemplo de represión sindical, la propia actuación de un sindicato cuando se “limita la libertad de expresión de un afiliado”, o que dedique un párrafo completo a explicar también que un ejemplo de “conductas antisindicales” es “el apoyo económico a sindicatos próximos a los intereses de la empresa, conocidos en el lenguaje coloquial

como ‘amarillos’”. La presidenta del Comité, con esta conducta, ha demostrado estar al servicio de la empresa y no de los trabajadores, a los que debería representar y defender.

Asimismo la veracidad de su testimonio quedó bastante en entredicho, ya que negó que yo hubiera hecho cualquier actividad sindical en Europastry, a la vez que reconocía mi participación en reuniones con miembros del sindicato CCOO en relación a la lucha por el convenio colectivo o para la preparación de elecciones sindicales, así como discusiones que tuvimos respecto a la manera de defender los derechos recogidos en el convenio colectivo. Estos hechos también fueron ratificados por el secretario general de la Federación Agroalimentaria del Vallès Occidental, que participó en dichas reuniones.

Finalmente, una aspirante al proceso de selección para sustituirme, que finalmente no fue contratada, verificó que el anuncio para sustituirme llevaba desde mayo colgado en InfoJobs, un mes y medio antes de mi despido, y un mes antes de la comisión del “colosal error” que, según Europastry, cometí.

EM.—¿Cuál ha sido el resultado de la sentencia?

IG.— La sentencia, en sus 32 páginas, desmonta completamente los argumentos de la empresa, acordando la nulidad del despido por vulneración del derecho a la libertad sindical, es decir, concluye que fui despedida por defender los derechos de mis compañeros e intentar llevar a cabo un sindicalismo combativo. Frente a los argumentos esgrimidos por la empresa, tratando de desacreditar mi profesionalidad, la sentencia reconoce: “la conducta intachable de la compañera, que lejos de ocultar su error, lo pone de inmediato en conocimiento de su jefe (...) actuando de buena fe con la finalidad de subsanar el error lo antes posible”. La sentencia considera probado que yo “tenía interés en ser candidata por CCOO en las elecciones a Comité de Empresa, que iban a convocarse en otoño de 2013”. Asimismo, estima que “existe una conexión de proximidad temporal que no elimina la sospecha de que el despido de la trabajadora tiene vinculación o relación con su proyectada participación en el proceso electoral”, concluyendo que “no probada por la empresa la gravedad de la conducta de la actora y vista por el contrario la buena fe con la que ésta actuó, al contactar con su superior jerárquico, entiendo que el despido disciplinario ha obedecido al pro-

pósito de vulnerar su derecho fundamental a la libertad sindical”, y por lo tanto: “**declaro que el despido disciplinario de la actora de fecha 27/06/13 debe declararse como nulo por vulneración de la libertad sindical de la demandante**”. Lo que significa mi readmisión inmediata en la empresa y el pago de los salarios de tramitación. Además, la sentencia obliga a la empresa a pagarme una indemnización de 6.000 euros.

EM.—¿Cómo te sientes al haber superado este grave ataque de la empresa, recuperando tu puesto de trabajo?

IG.— En primer lugar, quiero dejar constancia de que esta victoria es una victoria del movimiento obrero en su conjunto, pues la ofensiva hacia los que defendemos nuestros derechos de manera organizada y combativa, por desgracia, es constante y en muchas ocasiones, estos casos no se denuncian por falta de una orientación y unos métodos de lucha correctos. En este sentido, me gustaría difundir esta lucha para que pueda servir a todo aquel que sienta la necesidad de hacer frente a los ataques de los capitalistas, para que vea que realmente sí se puede hacerlos frente. También me gustaría agradecer a todos los compañeros y compañeras que han participado en la campaña mostrando su solidaridad y me han apoyado firmando la resolución exigiendo mi readmisión, colaborando en la caja de resistencia o dándome apoyo moral constantemente. Sin su apoyo este resultado habría sido imposible. También quiero hacer especial mención al papel jugado por los compañeros de la Corriente Marxista EL MILITANTE, así como al abogado que ha llevado mi caso, Vidal Aragonés Chicharro, cuyo excelente trabajo ha permitido desenmascarar las mentiras de la empresa, permitiendo obtener una contundente victoria para el movimiento obrero como es el respeto al derecho de libre sindicación. Esta sentencia vuelve a demostrar que la lucha es el único camino; que sí se pueden echar atrás los ataques de los capitalistas, y que la clave para esta y futuras victorias es la organización, contundencia en la lucha y solidaridad del movimiento obrero en su conjunto. Una de las lecciones más importantes a tener en cuenta en esta lucha es la necesidad de recuperar nuestros sindicatos de clase, la necesidad de recuperar un sindicalismo combativo, de clase y revolucionario, que enfrente contundentemente los ataques que todos los días venimos sufriendo los trabajadores.

¡Que viva la lucha de la clase obrera!

La ley del aborto del PP y el regreso del franquismo

Satisfacer la moral podrida de la jerarquía católica a costa de los derechos de las mujeres

Ana García
 Secretaria general del
 Sindicato de Estudiantes

El gobierno del Partido Popular ha decidido aprovechar al máximo los dos años que le quedan de legislatura para atacar aún más los derechos y libertades que conquistamos gracias a la lucha y a la movilización social. La educación y la sanidad están sufriendo gravemente sus políticas que pretenden hacer de estos derechos un privilegio al alcance únicamente de quien pueda pagarlos. Aún así parece que estos retrocesos de décadas no son suficientes. El anteproyecto de ley del aborto impulsado por el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón deja ver claramente el carácter profundamente reaccionario de este gobierno que pretende devolvernos a la época en que la moral podrida del nacional-catolicismo dictaba las costumbres de las personas e imponía sus reglas en el código penal.

Derechos de la mujer

Los avances logrados en la historia reciente con respecto al derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo han sido muy importantes. Si bien en el año 85 se despenalizó el aborto bajo los famosos tres supuestos de violación, malformaciones fetales o riesgo para la salud de la madre, se continuaba contemplando penas de cárcel para médicos y mujeres que no se atuvieran a dichos supuestos.

Esta situación cambió en el año 2010 bajo el gobierno del PSOE: aunque no se reconocía un aborto libre y gratuito por la Seguridad Social, se daban algunos pasos importantes respecto a la situación anterior. Ofrecía la posibilidad de que las mujeres pudiéramos abortar en las primeras 14 semanas de gestación; también se podía interrumpir el embarazo en cualquier momento por la llamada indicación eugenésica, que se da cuando el feto presenta riesgo de graves anomalías o bien una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico; incluso para cumplir la ley de autonomía del paciente (aprobada por el PP en 2002) ofrecía la posibilidad de que las mujeres de 16 y 17 años abortaran sin permiso paterno, ya que según esta ley a esa edad ya son mayo-

res para renunciar a un tratamiento médico o decidir si operarse o no.

Un retroceso inaceptable

Con la nueva ley del aborto, curiosamente redactada no desde el Ministerio de Sanidad sino desde el Ministerio de Justicia, el PP pretende convertir un derecho en un delito, satisfaciendo así las exigencias de la jerarquía eclesiástica. Con la *ley Gallardón*, se retrocede a tiempos pretéritos, propios de la dictadura franquista, al suprimirse la indicación eugenésica.

No sólo eso. Para poder acreditar el supuesto de riesgo de salud para la madre, será imprescindible el informe de dos médicos diferentes (antes sólo uno) que no podrá ser el mismo que practique el aborto y que tam-

apoyo de sus padres, del fiscal, e incluso del padre del embarazo no deseado. Al trauma de estar embarazada sin quererlo, una joven añade también un trauma igual o incluso mayor al tener que pasear su situación ante sus padres y las autoridades. Se vuelve a la atmósfera franquista, de tal manera que todo está orientado a que baste la oposición de uno de los padres para que la joven desista de abortar y todo quede "religiosamente en familia".

¿Derecho a la vida?

Estos cínicos defensores de "la vida", fieles seguidores de la doctrina ultraconservadora católica, quieren obligar a las mujeres, y a las familias, a cargar con el pesado fardo de una existencia desgraciada. Estos señores, que son

los mismos que han arrojado a 2,2 millones de niños a la pobreza y la exclusión social (datos de Cáritas), que han legislado el despido de miles de trabajadores, los salarios precarios, los desahucios, la privatización de la sanidad y la educación, que ponen cuchillas en las vallas de Melilla para que los inmigrantes no entren en nuestro país, que no condenan la dictadura franquista ni reparan a sus víctimas y que tienen en sus filas a traficantes de armas internacionales..., estos señores nos hablan del "derecho a la vida".

Para ellos el derecho a la vida está bien, pero lo de una vida digna parece que no lo tienen tan claro. ¿Qué va a ser de los fetos con mal-

formaciones que nazcan si el PP se está encargando de acabar con todas las ayudas a la dependencia? Además de tener una vida llena de sufrimiento tanto físico como psicológico para ellos y sus familias, se verán completamente excluidos en su día a día y abandonados por los servicios sociales que también el PP está desmantelando.

Con respecto a las malformaciones fetales que Gallardón quiere eliminar como supuesto para poder abortar legalmente, las consecuencias serán terribles. Tal y como explicaba el exneurocirujano infantil Javier Esparza al diario *El País*, existen ciertas malformaciones como la espina bífida abierta o la hidrocefalia congénita que son bastante comunes.

PASA A LA PÁGINA 4



poco podrá trabajar en la misma clínica en la que se vaya a practicar. Las dificultades que tendrá que afrontar una mujer que quiera abortar serán enormes con esta nueva legislación, pero más aún si tenemos en cuenta las consecuencias de los recortes en sanidad perpetrados por el PP: ¿de cuánto tiempo serán las listas de espera para poder obtener un informe de dos médicos diferentes que trabajen en clínicas distintas en esta situación? ¿Cuánto tiempo pasará desde que se solicita hasta que se obtiene ese informe? ¿Estarán a tiempo de poder abortar incluso las que obtengan un informe favorable de los dos médicos?

El tratamiento que hace la nueva ley respecto al aborto en las menores de edad es completamente victimizador: somete a la menor a un proceso en el que tiene que conseguir el

Únete a la corriente marxista agrupada en el periódico obrero EL MILITANTE y lucha con nosotros por una alternativa socialista:

- Reducción de la jornada laboral a 35 horas sin reducción salarial. Contra el desempleo: reparto del trabajo.
- Jubilación a los 60 años con el 100% del salario con contratos de relevo, manteniendo la estabilidad en el empleo.
- No a la precariedad laboral. Fijo a los quince días. Por trabajo periódico, contratos de fijos discontinuos.
- Salario Mínimo de 1.100 euros al mes a partir de los 16 años.
- No a la reforma laboral.
- Defensa de la empresa pública. No a las privatizaciones. Planes de inversión y renovación tecnológica que garanticen todos los puestos de trabajo.
- No a la discriminación de la mujer trabajadora. A igual trabajo, igual salario.
- Defensa de la sanidad pública. No a la privatización.
- Por una red educativa pública, única, laica, gratuita, científica y de calidad. 7% del PIB para la educación pública.
- No a los recortes en el subsidio de desempleo.
- Un puesto de trabajo o subsidio de desempleo indefinido igual al SMI hasta encontrar trabajo.
- Vivienda digna. Nacionalización de las grandes empresas constructoras y municipalización del suelo urbano para acometer la construcción de un millón de viviendas sociales en los próximos cuatro años.
- Ninguna restricción en nuestros derechos de expresión, reunión y huelga. No a la Ley de Partidos.
- Por el derecho de autodeterminación de las nacionalidades históricas. Por una Federación Socialista de Nacionalidades Ibéricas.
- Depuración de los elementos reaccionarios del aparato del Estado. Control por parte de los sindicatos obreros de las academias militares y de policía.
- Ninguna discriminación en el empleo por edad, sexo o nacionalidad. Derogación de la Ley de Extranjería. Plenos derechos laborales y ciudadanos para los inmigrantes.
- Expropiación de las empresas que se declaren en quiebra o en suspensión de pagos, bajo control obrero.
- Nacionalización de la banca, la tierra y los monopolios sin indemnización, salvo en casos de necesidad comprobada, y bajo control obrero. De esta forma se podría planificar democráticamente la economía en beneficio de la mayoría de la sociedad.

¡Suscríbete! Apoya la prensa obrera



Suscripción anual ▶ 11 números

	Normal	Ayuda
Estado español	23 €	35 €
Resto del mundo	35 €	47 €

Envía tus datos y un Giro Postal al Apartado de Correos 5.200, 28080 Madrid o comunícalo con nosotros a través del formulario de suscripción que aparece en nuestra web

Suscríbete

Recibe El Militante en tu casa
 Apoya la prensa obrera



Edita: AC El Militante • DL: M-14564-1989

CONTACTA CON NOSOTROS

ANDALUCÍA			
• Cádiz	678 940 435	• Girona	657 212 367
• Granada	616 893 592	• Tarragona	660 721 075
• Málaga	952 276 563	EUSKAL HERRIA	
• Sevilla	619 745 685	• Álava	945 231 202
ARAGÓN		• Guipúzcoa	625 707 798
• Zaragoza	697 338 376	• Pamplona	635 919 738
ASTURIAS	985 550 933	• Vizcaya	656 714 818
CASTILLA-LA MANCHA		GALICIA	
• Guadalajara	949 201 025	• Compostela	679 500 266
• Puertollano	650 837 265	• Coruña	600 810 516
• Toledo	699 956 847	• Ferrol	626 746 950
CASTILLA Y LEÓN		• Vigo	636 217 248
• Salamanca	653 699 755	MADRID	914 280 397
CATALUNYA		PAÍS VALENCIA	685 098 482
• Barcelona	933 248 325		

www.elmilitante.net • elmilitante@elmilitante.net